

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO
PERÚ





Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Esta es una publicación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Países.

**SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO**

PERÚ

El 4% del PBI de América Latina y el Caribe proviene del sector extractivo, un porcentaje equivalente al generado por la agricultura en la región. Para impulsar crecimiento sostenible, es necesario un relacionamiento efectivo entre gobiernos, empresas y sociedad civil. En este diagnóstico de Perú, el BID busca dar luz a las buenas prácticas entre actores del sector extractivo sobre acciones de información, diálogo, consultas, colaboración y alianzas que están generando desarrollo en el país. De los hallazgos del diagnóstico se ha generado además una hoja de ruta, para orientar a los actores en el fortalecimiento de su relacionamiento.

El presente cuadernillo se enfoca en los hallazgos de Perú y forma parte del diagnóstico regional que fue realizado en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. La publicación completa está disponible en: <https://publications.iadb.org/es/sector-extractivo-y-sociedad-civil-cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es>

Publicación elaborada gracias al Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) financiado por el Gobierno de Canadá

Liderazgo, coordinación de equipos y contenidos

Flavia Milano, Especialista Senior en Operaciones/Sociedad Civil, Vicepresidencia de Países, BID – Líder de Proyecto

Revisión y ajuste de contenidos

Martin Walter, Especialista de la Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID
Maria Dolores Vallenilla Sosa, Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID

Ediciones:

Irene Irazábal Briceño, Vicepresidencia de Países, BID
Viviane Espinoza, Vicepresidencia de Países, BID

Coordinación e investigación general:

Volker Frank (Fundación Futuro Latinoamericano)
Javier Caravedo (ProDiálogo)
Iván Ormachea (ProDiálogo)
Mitzy Canessa (Grupo de Diálogo Latinoamericano)
Bruno Gomes (Grupo de Diálogo Latinoamericano)

Equipo de investigación por país

Marina Irigoyen, Centro IDEAS - Investigadora y punto focal caso Perú

Especial agradecimiento

La líder de proyecto, el equipo de coordinación e investigadores país dan su especial agradecimiento y recordatorio a José Luis Lopez Follegatti, promotor del diálogo sobre minería y desarrollo sostenible en el Perú, quien en vida participó y jugó un rol importante para la conformación de este equipo y el desarrollo exitoso de esta investigación.

Contenido*

1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO REGIONAL	4
1.1. LOS TRES ACTORES INVOLUCRADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	9
1.1.1. <i>Empresas extractivas</i>	9
1.1.2. <i>Gobierno</i>	11
1.1.3. <i>Sociedad Civil</i>	15
1.2. LOS COSTOS DE LOS CONFLICTOS	17
2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	20
2.6. PERÚ	22
2.6.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	22
2.6.2. <i>Introducción</i>	24
2.6.3. <i>Buenas prácticas</i>	25
2.6.4. <i>Análisis de Actores</i>	42
2.6.5. <i>Marco Legal</i>	44
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO REGIONAL	47
3.1. CONCLUSIONES	48
<i>Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores</i>	48
<i>Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento</i>	48
<i>Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador</i>	49
<i>Sobre los principales actores</i>	49
<i>Sobre los temas abordados en las prácticas</i>	50
<i>Sobre el relacionamiento</i>	51
<i>Sobre las prácticas de relacionamiento</i>	52
3.2. RECOMENDACIONES	54
<i>Para las empresas</i>	54
<i>Para la Sociedad Civil</i>	55
<i>Para el Estado</i>	56
<i>Para los tres actores</i>	57
4. HOJA DE RUTA	58
HOJA DE RUTA DE PERÚ	61

*La tabla de contenidos de este cuadernillo mantiene la numeración original del diagnóstico regional.

Siglas y acrónimos

ACM	Asociación Colombiana de Minería
ACP	Asociación Colombiana de Petróleo
AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AMEXHI	Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
AMSA	Antofagasta Minerals
AMUCEP	Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
ANDI	Asociación de Industriales de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEM	Cámara Argentina de Empresarios Mineros
CAMIPE	Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Inc.
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CEMDA	Centro Mexicano en Derecho Ambiental
CERFORMOMALI	Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc.
CFE	Consejo Federal de Energía
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CITT	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
CMAP	Comité de Monitoreo Ambiental Participativo
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
COFEMA	Consejo Federal del Ambiente
COFEMIN	Consejo Federal de Minería
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CORMIDOM	Corporación Minera Dominicana
CVSA	Cerro Vanguardia SA
DGM	Dirección General de Minería
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
ENTRE	Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FALCONDO	Falconbridge Dominicana
FARN	Fundación Ambiente y Recursos Naturales
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano
FOMISAR	Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez
GDL	Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible
GDMDS	Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible
GMN	Grupo Multipartícipe Nacional de EITI
ICMM	International Council on Mining and Metals
IED	Inversión Extranjera Directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
LWR	Lutheran World Relief
MAC	Asociación Minera de Canadá
MBV	Mesa de Buenos Vecinos
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MSX	Minera San Xavier

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PACMA	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
PAE	Panamerican Energy
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGS	Plan de Gestión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PUCP	Universidad Católica del Perú
PVDC	Pueblo Viejo Dominicana Corporation / Barrick Pueblo Viejo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SMCV	Sociedad Minera Cerro Verde SAA
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SODOGEO	Sociedad Dominicana de Geología.
SPH	Sociedad Peruana de Hidrocarburos
TSM	iniciativa “Hacia una minería sustentable”
UAGRO	Universidad Autónoma de Guerrero
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
UTECO	Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

1. INTRODUCCIÓN

Los países ricos en recursos naturales y la consiguiente actividad extractiva de esos recursos no renovables -minerales, petróleo y gas-, impulsan varias perspectivas de aproximación. El análisis económico permite estimar los costos de inversión, la rentabilidad de las empresas y los aportes con los que el sector extractivo contribuye a la economía de una nación o región. Desde un punto de vista de adelantos tecnológicos, las industrias extractivas requieren el empleo de sofisticadas tecnologías de punta con el potencial de contribuir a reducir impactos adversos. Desde lo ambiental, por la dimensión propia de este tipo de proyectos, se habla de los impactos de las actividades extractivas en la naturaleza y la biodiversidad, la competencia por el uso de recursos hídricos, las consecuencias en los cultivos y la posible contaminación de ríos o fuentes acuíferas y donde, las tecnologías mencionadas, pueden jugar un papel decisivo en las medidas de ahorro y mitigación.

Desde la perspectiva social se requiere una sofisticación no menor para abarcar y analizar oportunidades y desafíos entre los actores involucrados, frente a las diferentes fases de los grandes proyectos, como la exploración, explotación y cierre, especialmente respecto a las comunidades aledañas¹.

El diagnóstico que se presenta a continuación se acerca al sector extractivo desde una perspectiva de relacionamiento entre los principales actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y las Comunidades afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva. El diagnóstico se aleja de un enfoque clásico hacia las actividades extractivas como “de maldición de los recursos naturales” para investigar y poner en evidencia aquellos hallazgos donde el relacionamiento de actores efectivo representó una oportunidad de desarrollo.

El diagnóstico como línea inicial partió de información conocida basada en estudios previos y experiencia de campo, repasando que la actividad extractiva conlleva el involucramiento de esos tres actores en diferentes capacidades: (i) el **gobierno** y su rol a nivel nacional, provincial y/o municipal respecto a los pasos relacionados con la actividad extractiva como el diseño y asignación de pliegos de licitación, autorizaciones, monitoreo de implementación, con un lapso temporal de influencia de las decisiones políticas (en ausencia de instituciones que respalden dichas decisiones) más breve comparado con los otros dos actores, (ii) la **empresa** que por la naturaleza de la actividad extractiva a largo plazo permanece en el terreno por periodos en general comprendidos por decenios y que luego de



¿Cómo los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?





obtenidas las autorizaciones y licencias (incluida la social), se emplaza geográficamente y pasa a formar parte de la vida de las comunidades aledañas a la zona de extracción. Esta particularidad no menor que define a la actividad extractiva, tiene una influencia en el tejido social y la economía local con impactos en la composición de los grupos tradicionales: (iii) las **comunidades**, además de ser responsables de dar información y comprender el alcance del proyecto para otorgar, la licencia social para operar permanecen en el terreno por generaciones y mantienen un relacionamiento en cada fase de la actividad (tratándose de extracciones “onshore”, desde la apertura al cierre de actividades). La actividad extractiva puede aportar oportunidades a las comunidades y también pueden conllevar nuevas tensiones al interno de la propia población. Entre estas oportunidades y tensiones estaría la empleabilidad de trabajadores provenientes de las comunidades. Por los requerimientos específicos y perfil técnico esta empleabilidad tiende a ser baja, generándose mayor competitividad por puestos de servicios. En ocasiones esta circunstancia puede abrir una brecha entre aquellos trabajadores provenientes de las comunidades versus miembros de la misma comunidad sin trabajo en la empresa. Las comunidades son susceptibles de fracturas internas donde no existían conflictos con anterioridad. Este factor también viene con el arribo de trabajadores fuera de la comunidad que generan un aumento significativo de la población local con nuevos habitantes en la zona y ajenos a las tradiciones y ritmos rurales. Esta circunstancia a su vez genera una natural presión sobre un mismo territorio y respecto a los mismos recursos. Nuevas construcciones de infraestructura y los tiempos

de obras que afectan la circulación al interno de las comunidades, son también otros de los conflictos registrados como así; posible aumento del consumo de alcohol; desbalance del número de hombres respecto a mujeres; potencial aumento de crímenes de género; inicio o aumento de actividades de prostitución. Mención aparte merece la capacidad de la empresa de influir en la cadena de valor con diferentes emprendimientos y organizaciones de servicios que pueden crecer en oportunidades de desarrollo por la llegada de la empresa y que también, en muchos casos, dejan a la empresa extractiva a merced de la fijación monopólica de los precios de esos servicios.

¿Cómo las partes involucradas pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?

Para responder a esa pregunta, el presente diagnóstico se enfocó en estudiar las buenas prácticas de relacionamiento, que han conseguido tanto resultados medibles y comparables susceptibles de ser replicados, como nuevos emprendimientos productivos o avances significativos como por ejemplo en sectores de educación y salud como también impactos intangibles como la generación de confianza y procesos de colaboración. El enfoque busca evidenciar lo que sí funciona en una actividad que representa para algunos de los países ricos en recursos naturales más del 50% de sus ingresos fiscales². Las buenas prácticas que se reúnen en esta publicación dan pautas y orientaciones para consolidar y mejorar el relacionamiento entre los tres actores y muestran caminos innovadores, por los que el sector extractivo pueda aportar al desarrollo nacional y local en los países de América Latina y el Caribe.



**La actividad extractiva
representa para
algunos de los países
ricos en recursos
naturales más del 50%
de sus ingresos fiscales**

Las buenas prácticas muestran que un buen relacionamiento genera confianza, logra acuerdos sobre temas en disputa, fortalece la economía local, genera prácticas ambientalmente sostenibles y mejora la calidad de vida de la población. Las propias buenas prácticas también indican que el relacionamiento de actores es el resultado de procesos donde se requiere una visión de mediano y largo alcance, adherida a la asignación e inversión de recursos humanos y financieros.

Para este diagnóstico se seleccionaron países de la región ricos en recursos naturales con diferentes perfiles y experiencia en temas extractivos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.

Para la elaboración de este estudio se validaron las experiencias encontradas, triangulando las mismas con representantes de industria/empresa, comunidades/sociedad civil y gobiernos, para asegurar su acuerdo respecto a la experiencia considerada como buena práctica según criterios anteriormente definidos³. Ulteriormente, se realizó una segunda validación mediante diferentes fuentes de información como material escrito, entrevistas, visitas de campo y mesas de trabajo.

A fin de ordenar el universo de experiencias se agruparon metodológicamente los hallazgos en cinco niveles de relacionamiento⁴.



Información:

Este nivel comprende la entrega de datos y referencias sobre el proyecto extractivo por parte de la empresa y del gobierno. También, incluye la facilitación de información por parte de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre el territorio y los portadores de interés.



Diálogo:

El diálogo se refiere al intercambio activo, continuo e informal que a partir de diversos grados de contacto entre los actores en torno al sector extractivo busca crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones.



Consulta pública⁵:

La consulta se considera un proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto extractivo.



Colaboración

Son las acciones en las que las comunidades, la empresa extractiva o gobierno elabora productos de conocimiento o en las que la misma comunidad participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado que beneficie el crecimiento económico local.



Alianza

Son las acciones en las que se incluyen y financian comunidades para que sean estas las encargadas de implementar un proyecto o componente proyecto en torno al proyecto extractivo.

1.1. Los tres actores involucrados con las actividades extractivas

1.1.1. Empresas extractivas

El término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas – que tienen como objetivo extraer recursos naturales⁶. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala.

Las empresas extractivas operan en las zonas de periferia del mundo, cotizan en los mercados de valores internacionales, emplean tecnologías de punta, e interactúan localmente con los gobiernos y comunidades. A nivel mundial, las empresas extractivas asociadas en su mayoría en gremios globales, vienen impulsando un conjunto de iniciativas para fortalecer su relacionamiento con las comunidades locales. La industria minera cuenta con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que lidera el campo de la responsabilidad social en el sector⁷. Es una organización conformada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable. ICMM, fundada en 2001, reúne a 23 de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como 34 asociaciones regionales, nacionales y de *commodities*. Dichas empresas y asociaciones se comprometen a mejorar su rendimiento en el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que se necesita a nivel social⁸.

Igualmente, la industria hidrocarburífera, cuenta con la "International Association of Oil & Gas Producers" fundada en 1999 como la voz de la industria líder global⁹. Los miembros de la asociación producen más de un tercio del petróleo y gas que consume el mundo. La asociación opera apoyando a los reguladores de la industria para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental y social. Es también un espacio único donde los miembros de la asociación intercambian conocimientos y buenas prácticas para mejorar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social¹⁰.



Para las industrias, la presencia de los gobiernos con regulaciones claras y el relacionamiento efectivo con la población local son elementos claves para la inclusión de los interesados en el mejor éxito de las operaciones. La experiencia ha enseñado que las empresas buscan un proceso continuo de relacionamiento con las comunidades locales, en miras a construir confianza y tener un apoyo de la mayoría de la población para el avance del proyecto extractivo. Existe una tendencia creciente por la que las empresas consideran a la población como un aliado potencial para la implementación del proyecto, y con la cual es necesario construir confianza, desarrollar vías de comunicación efectiva y acordar normas de un relacionamiento que implique resultados e impactos positivos para todos los actores involucrados¹¹.

Gracias a los resultados del presente diagnóstico pudo constatararse que la mayoría de las empresas fomentan una interacción con las comunidades que va más allá de compartir informaciones o mantener diálogos informales y promueven y elaboran planes de relacionamiento que ayudan a minimizar el impacto negativo y aumentan las oportunidades económicas y sociales que se abren con el proyecto extractivo. En esta línea y fuera del nivel comunitario, la sociedad civil se ha constituido en una masa crítica que junto a empresas responsables han impulsado y adherido a principios voluntarios de derechos humanos y negocios¹², cumpliendo a una misma vez con el respeto y promoción de otros derechos sociales y económicos¹³.

Se ha relevado también que existe un interés en promover a las empresas locales mediante su vinculación a la industria extractiva como proveedores de bienes y servicios. De esta manera se fomenta el fortalecimiento de la economía local, con el impulso del sector extractivo, constituyéndose en un interés compartido con el gobierno¹⁴.



En una misma línea, el diagnóstico ha arrojado evidencia, que las industrias, gestionan el relacionamiento con las comunidades y asignan recursos humanos y técnicos¹⁵. Por otro lado, las empresas que se dedican a actividades de exploración en la primera fase del proyecto extractivo suelen no tener los recursos económicos para desarrollar procesos de colaboración y alianzas por requerir de una planificación e inversión de recursos humanos y financieros más importantes, por lo que las acciones de información y diálogos iniciales son decisivas. En otro orden, algunos proyectos en fase de explotación no cuentan con recursos humanos y financieros preasignados para un relacionamiento empresa-comunidad eficiente. Algunas empresas al no contar con una planificación para su relacionamiento pueden fallar en comunicar las oportunidades y los límites de su accionar¹⁶.

Durante la implementación del proyecto, el gobierno –nacional y local- y la empresa se encuentran en una situación de colaboración necesaria y tienen roles complementarios en el relacionamiento con la comunidad. No obstante, no siempre los roles respectivos están claros y no en todos los casos existen las capacidades necesarias para cumplir con dichos roles¹⁷.

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado que el relacionamiento en el sector extractivo se ha visto impulsado por avances importantes en el diseño y la implementación de principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el ICCM, las empresas han mejorado sus prácticas en aspectos como transparencia, derechos humanos y ambiente y buscan la forma de contribuir a un desarrollo sostenible a nivel país en los territorios donde operan¹⁸. Muchas empresas extractivas incluyen en su política de RSE programas de promoción de capacidades productivas, como también programas de salud, mejoramiento de infraestructura local y de educación formal¹⁹.

1.1.2. Gobierno

Los gobiernos nacionales de la región²⁰, sin distinción en cuanto a su orientación partidaria, han implementado políticas para la captación de inversiones extranjeras directas para proyectos que incluyen a las industrias extractivas²¹. Los altos precios de las materias primas han aumentado los ingresos fiscales de los países en América Latina y el Caribe y han incrementado la inversión y la actividad económica. Algunos gobiernos en la región ahorraron una porción de los ingresos y otros usaron dichas ganancias para incrementar el gasto fiscal. Es por eso que la reducción de los precios a finales de 2008 y con más fuerza entre 2012 y 2013 ha impactado de manera diferente en el desarrollo de los países²².

El auge de los precios de las materias primas ha tenido sus impactos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en la región²³. El sector extractivo también ha tenido efectos positivos en el empleo; no obstante, en comparación con el total de la Población Económicamente Activa (PEA) los aportes son relativamente modestos. En los países seleccionados para el diagnóstico, el porcentaje del empleo del sector extractivo frente a la PEA es de alrededor el 1% con excepción de Chile donde supera el 2%²⁴.

Los gobiernos buscan adaptar su marco institucional y legal para seguir captando ingresos a través del sector extractivo. La caída de los precios de los recursos mineros y petroleros a partir de 2013 ha llevado a los gobiernos nacionales a crear marcos normativos atractivos que aseguren la estabilidad económica y jurídica de las inversiones en el sector, lo que frecuentemente plantea dilemas para el equilibrio en su rol de regulador de las actividades extractivas y garante de los derechos humanos y recursos naturales²⁵.



Los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, han fortalecido sus sistemas democráticos e institucionales, han gestionado eficientemente la macroeconomía y han implementado políticas sociales incluyentes con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Aun así, el fin del boom de las materias primas ha develado problemas estructurales, en varios países de la región, referidos a asuntos fiscales e institucionales, así como a otros de tipo social, político y económico²⁶.

Los gobiernos nacionales crean el marco normativo e institucional bajo el cual se desarrolla el relacionamiento entre empresa y población local. Especial atención merece la consulta a Pueblos Indígenas considerada en marcos legales mediante la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo²⁷. Perú es el único país del estudio en el cual la consulta está reglamentada por una ley, mientras que en Chile, Colombia y México existen normas legales a nivel de decretos para este fin²⁸.

En otro orden y respecto al nivel de acceso a información también se encontró que está fuertemente regulado. En todos los países existen normas legales que facilitan el acceso a información de manera general, y en las leyes ambientales se especifica el acceso a informaciones sobre el estado de la naturaleza. La elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, incorporan en muchos casos derechos importantes para la población local como el acceso a información, a la consulta y otras formas de relacionamiento de actores²⁹.

Respecto al marco institucional del sector extractivo el gobierno nacional está conformado por diferentes ministerios que no necesariamente comparten las mismas prioridades, aunque su funcionamiento se rige por unos lineamientos generales de política pública. En todos los países del diagnóstico son los ministerios de minería y energía quienes diseñan las políticas para el sector extractivo y controlan el cumplimiento de los mismos³⁰. Por otra parte, existen los ministerios que velan por el ambiente y son los encargados de la aprobación de la licencia ambiental. Según cada país, intervienen otros ministerios en el relacionamiento con la población local. Por ejemplo, en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena coordina la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las comunidades indígenas³¹. En cambio, el Ministerio de Interior de Colombia lidera la interlocución con las comunidades locales. En Perú, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, aunque ha perdido su rol en los últimos años³².

Aparte del poder ejecutivo, en los países que fueron analizados en el diagnóstico existen otros actores estatales a nivel nacional que intervienen en el relacionamiento entre empresa, comunidad y Estado en el sector extractivo. La Defensoría de Pueblo actúa como garante de los Derechos Humanos y en algunos países como Perú también es un promotor importante de diálogos a nivel local. En México, es la empresa estatal PEMEX quien diseña las políticas de relacionamiento en el sector petrolero. La Corte Constitucional de Colombia, frente a la ausencia de una ley que regula la consulta previa,

ha contribuido a darle cuerpo a esta norma internacional³³. En resumen, intervienen una serie de actores nacionales estatales en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Si bien este accionar cubre posibles vacíos regulatorios, esto también aumenta el riesgo de una falta de coordinación entre las diferentes instancias por un lado y entre estas y otros actores como empresas y comunidades por el otro³⁴.

El diagnóstico también encontró que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos³⁵. Mientras que las competencias sobre el sector extractivo son centralizadas en el gobierno nacional, los gobiernos locales juegan un rol fundamental como representantes e interlocutores de la población local.

Las posibilidades de relacionamiento con los gobiernos locales dependen de sus perspectivas y políticas frente al sector extractivo. El diagnóstico muestra que, por ejemplo, en Argentina existen gobiernos provinciales con normativas favorables para el desarrollo del sector extractivo responsable mientras que otros siete gobiernos provinciales del mismo país han dictado leyes

que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos³⁶. En Colombia, hasta mediados de 2017 los Concejos Municipales de cinco municipios colombianos han aprobado consultas populares en torno a proyectos extractivos, y en todas las consultas la población ha votado en contra de estos proyectos³⁷.

Los gobiernos locales no solamente son interlocutores importantes en procesos de diálogo y colaboración, sino también juegan un rol central para que los recursos provenientes del sector extractivo sean invertidos de manera efectiva en obras que benefician a las comunidades aledañas al proyecto. Dependiendo del país, hasta 50% de los ingresos fiscales son distribuidos a los gobiernos locales, siendo Chile el país en el cual más se centralizan los ingresos y Colombia y Perú los países con mayor proporción de recursos descentralizados³⁸. Una condición importante para que los recursos aporten al



desarrollo local es la capacidad de los gobiernos subnacionales para coordinar la inversión y efectuarla de manera eficiente. Los recursos constituyen una oportunidad para el desarrollo y una transformación de las dinámicas y economías locales, siempre y cuando en los territorios estén las capacidades instaladas para poder aprovechar esta oportunidad³⁹.

El diagnóstico muestra que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las oportunidades para que los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local⁴⁰. Por ejemplo, en Argentina los tres sectores conformaron una la Agencia de Desarrollo a nivel local que contribuyó a que la economía local basada en la producción de lana, que atravesaba una fuerte crisis, se recuperara y generara alternativas productivas. La empresa minera que operaba en la zona impulsó la creación de la Agencia, participó activamente en ella, y financió algunos proyectos priorizados por la misma. Otro de los ejemplos es la Mesa de Buenos Vecinos que reúne a los tres actores en un municipio en Chile y orienta la inversión del sector extractivo hacia nuevas opciones económicas de desarrollo⁴¹.

Para los gobiernos locales, es de suma importancia que la inversión de los recursos se oriente a un plan de desarrollo del territorio y a un proceso de ordenamiento territorial, posibilitando de esta manera que los recursos sean destinados a las obras de mayor relevancia para los actores locales y respetando la planificación del gobierno local en lo que se refiere a sus posibilidades ambientales, económicas y sociales. Según esta perspectiva, el sector extractivo debería ser “un invitado en este proceso”⁴², que se suma y agrega valor a ese plan de desarrollo consensuado entre los grupos poblacionales y basado en la realidad del territorio.

En todos los niveles de gobierno, sobre todo en países con poca tradición extractiva, existe demanda para más capacitación y formación en temas relacionados con el sector. A nivel de los gobiernos locales se requiere la contratación de más técnicos especializados en estos temas. Un mayor conocimiento del sector extractivo facilitará una negociación más equitativa entre gobierno local y empresa extractiva y ayudará a consolidar y mejorar las prácticas de relacionamiento, lo que a su vez resultará en obtener más beneficios para la población local⁴³.





1.1.3. Sociedad Civil

La sociedad civil está conformada por una amplia gama de organizaciones y grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales y étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional o internacional. A nivel nacional, se encuentran fundaciones, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), academia, movimientos sociales, confederaciones de pueblos indígenas, iglesias, o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo, y sindicatos. A nivel local, actúan comunidades, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos indígenas y grupos afrodescendientes. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (agrupaciones no registradas oficialmente).

La heterogeneidad de la sociedad civil se refleja también en los diferentes roles que asumen sus organizaciones en el relacionamiento con los sectores privado y público en torno al sector extractivo. Los diagnósticos de todos los países seleccionados reportan una polarización de la sociedad entre opositores y partidarios en torno al sector extractivo. Pero también reportan una diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo que difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

La diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

Por un lado, en los países analizados existen OSC que crean y fortalecen espacios de relacionamiento entre empresas, Estado y las mismas comunidades y facilitan la comunicación entre los tres actores a nivel nacional y local. Por otro lado, existen OSC que desde una perspectiva crítica buscan incidir en las políticas públicas y generan información para contribuir a que las actividades extractivas cumplan con los derechos de las comunidades y estándares ambientales y sociales. En tercer lugar, se encuentra una serie de OSC que se oponen a la actividad extractiva incondicionalmente y fomentan y acompañan acciones de resistencia de la población local.

El diagnóstico relevó que, en Argentina, Chile y México, las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en

torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos. Generalmente, las universidades gozan de legitimidad ya que son consideradas como instancias con alto grado de saber técnico por ende guiados por este y percibidos en un rol neutral. Un ejemplo es el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (*Prodiálogo*) del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades con más prestigio en México que organiza foros y talleres multisectoriales para promover el diálogo en torno al sector extractivo⁴⁴.



Las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos.

Otros actores esenciales, son las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como actores con rol de decisión. Las empresas requieren la licencia social lo que implica un cierto grado de consentimiento de las comunidades para poder desarrollar su proyecto.

El presente diagnóstico recoge casos en los que las comunidades aledañas a proyectos extractivos los consideran como oportunidades de desarrollo y están dispuestas a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles. En estos procesos, las comunidades se han comprometido en un respeto a sus propias visiones de desarrollo y se relacionan con las empresas sobre la base del cumplimiento de esa visión. También, se comprometen con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

El diagnóstico muestra la evolución del relacionamiento respecto a la inversión de recursos en territorios ancestrales. Muchas de las buenas prácticas reportan el fortalecimiento de asambleas comunitarias y otros mecanismos de toma de decisión tradicionales mediante la presencia de la empresa en estos espacios para proporcionar la información y buscar el consentimiento de las organizaciones indígenas. En Colombia, el enfoque intercultural del relacionamiento de la empresa Cerrejón con un resguardo del pueblo Wayuú incluía el respeto a su cosmovisión, el uso del idioma Wayuú y la integración de autoridades indígenas tradicionales en la comisión de negociación. De esta manera, se respondió a las demandas de los pueblos indígenas por participación y autodeterminación, entendida como derecho a poseer, controlar, manejar y desarrollar el territorio⁴⁵.

1.2. Los costos de los conflictos

Un relacionamiento deficiente donde las quejas y las preocupaciones de la comunidad se acumulan sin resolución durante largos periodos de tiempo causa e intensifica conflictos que a su vez generan costos para la empresa, Estado y comunidades.

Un estudio que analiza los costos para las comunidades de seis proyectos de inversión de gran escala (dos de agroindustria, dos de energía, y dos de minería) encuentra los siguientes tipos de costos que generan los conflictos a nivel comunitario⁴⁶.

1. Financiamiento del movimiento opositor (honorarios de dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias contra el proyecto, redes sociales).
2. Financiamiento de asesorías legales que permitan judicializar los proyectos.
3. Financiamiento de estudios técnicos para contrastar informes de la empresa.
4. Financiamiento de traslados para las movilizaciones, reuniones informativas, visitas a autoridades políticas.
5. Depreciación de viviendas y actividades económicas por habitar próximos al proyecto y asumir impactos ambientales.
6. Fractura del tejido social, en tanto los conflictos generan efectos psicológicos y emocionales, desconfianza, competitividad y descalificaciones entre los propios habitantes.

Para el Estado, el mismo estudio indica los gastos relacionados con el encarecimiento del proceso de licenciamiento ambiental y con eventuales juicios y peritajes. Adicionalmente, el Estado tiene costos de personal para enfrentar los conflictos, para policía y militares y debe asumir también precios políticos. El país en general puede perder productividad e ingresos, competitividad e inversiones extranjeras⁴⁷.





El cálculo de los precios de los conflictos para las empresas resulta de la diferencia entre los gastos para la prevención y el abordaje de los conflictos (relacionados con la seguridad, contratación de personal especializado, capacitación del personal, entre otros) y los costos por los resultados del conflicto (modificaciones del proyecto, daños materiales, pérdida de productividad, reputación, entre otros)⁴⁸.

Mención aparte merecen los costos derivados de la mala reputación generada por un relacionamiento deficiente que dificulta la búsqueda de nuevo capital y los auspicios de inicio de una operación en un nuevo país⁴⁹.

Según una consulta realizada por el Fraser Institute, 36% de las empresas mineras encuestadas afirmó que la oposición pública a la minería ha afectado negativamente el proceso de autorización por parte del gobierno, resultando en demoras o rechazos de los permisos. La mayoría expresó que los argumentos de la oposición al sector extractivo fueron ambientales o de derechos de pueblos ancestrales⁵⁰. Por otro lado el BID, señala que de un total de 200 proyectos de infraestructura que se enfrentaron con algún tipo de conflicto, 36 fueron suspendidos debido a los conflictos, 162 enfrentaron retrasos y 116 sobrecostos⁵¹.



Según un estudio de la organización BDO International, la mayor preocupación para los ejecutivos internacionales mineros son los retrasos existentes y potenciales de los proyectos mineros. En una encuesta, ejecutivos financieros de alto nivel de Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Canadá expresaron sus inquietudes acerca del acceso a capital y créditos durante 2013, principalmente por las interrupciones observadas en diversos proyectos mineros⁵².

En 2008, un análisis de 190 proyectos de las empresas más importantes del sector petrolero arrojó como resultado que el tiempo hasta el inicio de la operación casi se había duplicado respecto de la década anterior. La razón fue el incremento de los costos. Un análisis más detallado mostró que los riesgos no técnicos constituían 50% del total de los riesgos y que entre este 50%, el riesgo más significativo fue el relacionamiento con otros actores sociales⁵³. Otro estudio de 19 empresas mineras de extracción de oro encontró que dos terceras partes de su valoración en el mercado fueron resultados de sus prácticas de relacionamiento con actores clave y solamente una tercera parte fue en función del valor del oro en el terreno⁵⁴.

De lo anterior se desprende la perspectiva de riesgos, donde los costos de los conflictos también señalan la necesidad de una planificación oportuna en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Este relacionamiento debe atender y equilibrar la diversidad de necesidades e intereses de todos los actores y así permitir un clima mejorado de inversión y el logro de beneficios comunes para todas las partes involucradas.

2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL



A continuación, se detallan los hallazgos de las buenas prácticas de relacionamiento identificadas y validadas en Perú. El análisis de cada país se inicia con un cuadro resumen del contexto, buenas prácticas, mapeo de actores y marco legal. Posteriormente, se describen las buenas prácticas con más detalles, las partes involucradas y el marco legal en el cual se insertan dichas buenas prácticas. Al final del documento, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales.





2.6. PERÚ

Marina Irigoyen, Centro IDEAS: marinadelria@gmail.com

2.6.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en 2016, el sector extractivo ha aportado con 14% al PIB²⁰¹. El cobre, el oro y el zinc fueron las principales aportantes. En 2016, los sectores minería e hidrocarburos aportaron 64,65% de las exportaciones totales del país. En el mismo año, el monto de las transferencias económicas del sector extractivo a los gobiernos regionales y locales superó los 1.354 millones de dólares estadounidenses; además de ello hay otros aportes como los fideicomisos o el nuevo Fondo de Adelanto Social (FAS) en minería. Los aportes sufrieron una baja frente a 2015. Así por ejemplo, en el caso de los Gobiernos Regionales, las transferencias mineras e hidrocarburíferas significaron 5,50% de sus ingresos para 2015 y 3,30% para 2016. Para los Gobiernos Locales, las transferencias representaron 17,52% del total de sus ingresos para 2015 y 13,89% para 2016²⁰².

En 2016, la minería generaba 174.126 empleos directos (61.873 empleos de las compañías mineras titulares de la actividad minera y 112.253 empleos por las empresas contratistas mineras que brindan servicios a dichas compañías). Se estima que hay 1'567.138 empleos indirectos²⁰³ creados por el sector de minería²⁰⁴.

Social: la sociedad civil en Perú es dispersa aunque con creciente conciencia ambiental. Hay importantes movimientos de intelectuales, activistas y comunidades que se oponen a las actividades extractivas; por otro lado hay comunidades que negocian con las empresas y llevan a cabo actividades conjuntas así como ONG y universidades que establecen alianzas.

En diciembre de 2017, la Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos socioambientales²⁰⁵, entre latentes y activos, existiendo una declinación de éstos frente al 2016 (212 conflictos). El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible alienta desde 1999 el diálogo cívico entre líderes del sector público y privado.

Buenas prácticas



Alianza para promover el círculo virtuoso del agua: Cerro Verde en Arequipa (2010 - 2017, Diálogo/Alianza). A partir de conflictos sociales, se creó una alianza multisectorial que abarca también diferentes niveles de Gobierno para la ejecución y mantenimiento de obras de beneficio colectivo de captación de agua con represas, plantas de tratamiento y sistemas de distribución. El acuerdo entre la empresa minera, el Estado y la comunidad sobre distribución de gastos y responsabilidades es producto de un largo proceso de discusión y aproximación en una mesa de diálogo en la que han participado representantes de todos los sectores.

Monitoreo ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo (2007 - 2017, Diálogo/Colaboración). En la región Arequipa se ha establecido un "comité de monitoreo ambiental formado por delegados de las comunidades, la empresa minera, el gobierno local, ONG, entre otros. La colaboración permite un monitoreo participativo y regular de la calidad del agua y abre un espacio de relacionamiento para conversar sobre otros temas. La comunicación entre la empresa y los líderes comunitarios se volvió más periódica y específica y se pudieron mitigar conflictos, fomentando respeto, tolerancia, perseverancia y sinceridad entre los actores.

Mapa de Actores



Mesa de diálogo de Huari. Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari (2011 - 2017, Información /Diálogo/Colaboración). Después de protestas y la toma de carreteras, el gobierno intervino y se instalaron mesas de diálogo entre la empresa, autoridades nacionales y locales y representantes comunales y de la sociedad civil. En dos mesas, ambiente e inversión social, se lograron acuerdos. El diálogo empezó en un clima de confrontación y desconfianza. Posteriormente, se ha impulsado una cohesión social entre las comunidades así como aprendizajes significativos en todos los sectores.

REDyPAC en Hualgayoc: Una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía (2009 - 2017, Colaboración/Alianza). Dos organizaciones no gubernamentales y una empresa unen esfuerzos y recursos para fortalecer redes empresariales y participación ciudadana a través de proyectos de colaboración orientados a mejorar los ingresos de los campesinos del área de influencia directa y aledaños. Fomentan la toma de decisiones en una óptica de “todos ganan”. El modelo consiste en asistencia técnica y oferta de tecnologías para el crecimiento agrícola y la promoción de agroforestería, tanto como capacitaciones en participación ciudadana, relacionamiento con autoridades de nivel regional y nacional y una escuela de líderes.

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (1999 - 2017, Diálogo). Se trata de un grupo de trabajo multisectorial nacional de organizaciones, líderes, empresas e instituciones vinculadas al sector minero que anima a establecer un intercambio de opiniones diversas. Es innovador en el tipo de relacionamiento principalmente informal y a la vez el diálogo es estructurado según diferentes espacios de interacción. Ha logrado expresiones de acuerdos multisectoriales y ha promovido iniciativas similares a nivel regional y local.

Destaca la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como el más significativo gremio de las empresas de industrias extractivas, la cual congrega, defiende y promueve los intereses de los empresarios mineros, petroleros y de energía, con preponderancia de los primeros. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) es un gremio nuevo.

El Ministerio del Ambiente y sus entidades adscritas como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles que ve la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería con creciente presencia y legitimidad. El Ministerio de Energía y Minas como entidad de promoción del sector. La Defensoría del Pueblo, como entidad autónoma del Estado con presencia y reconocimiento nacional²⁰⁶. El viceministerio de Interculturalidad que coordina y acompaña la consulta a pueblos indígenas y originarios.

Están las comunidades indígenas y campesinas que no cuentan con una representación nacional sólida y representativa salvo las amazónicas²⁰⁷. Las ONG ambientalistas y de derechos humanos con creciente voz.

Marco Legal y Regulatorio



Perú cuenta con un marco jurídico extenso para el relacionamiento en la industria extractiva. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo fue ratificado en 1993 y entró en vigencia en 1995. Perú cuenta con una Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (N°29785, 2011) de la cual se deriva un reglamento (DS N° 001-2012-MC). La Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios se exige hasta en tres oportunidades según el Texto Único Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM. En minería se establece luego de la concesión, antes de la explotación minera, mientras que en la actividad petrolera se da antes de la adjudicación del lote.

La Ley General de Ambiente (N° 28611) remarca el derecho a información (art. 41 y 42) y el derecho a presentar opiniones, puntos de vista y aportes frente a decisiones tomadas en relación al ambiente (art. 46). Adicionalmente, la Ley de Gobiernos Regional, de Municipalidades, y del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental regula los diferentes niveles de relacionamiento.

Existen reglamentos para la participación ciudadana tanto para el sector minero como el petrolero. Los recursos del subsuelo son de propiedad de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento según establece la Constitución. La entidad encargada de otorgar los títulos de concesiones mineras es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Las empresas mineras requieren la autorización del propietario del terreno superficial, que en muchos casos son comunidades, para la exploración, además de cumplir con lo estipulado en la Consulta Previa. Se ha generado la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (ex ONDS) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros como instancia para la gestión de los conflictos socioambientales.

2.6.2. Introducción

En Perú, el sector extractivo es la principal fuente de divisas que dinamiza la economía. Los recursos para los territorios regionales y locales dependen de los precios internacionales. Sin embargo, el sector extractivo es una actividad controversial²⁰⁸. Algunos temen impactos ambientales y la complejidad de las relaciones socio-económicas genera percepciones negativas en las poblaciones afectadas por la intervención.

Existe un extenso marco legal (suscripción del Convenio 169 OIT y normas de Consulta Previa así como participación) y una normatividad ambiental avanzada pero esta no se cumple a cabalidad en muchos casos²⁰⁹ denotándose en particular en el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En los últimos años, la conflictividad socioambiental, y el rechazo a importantes proyectos mineros, ha sido materia de análisis y búsqueda de propuestas, influenciada además por avances en la Responsabilidad Social Empresarial por parte de algunas empresas extractivas así como la presión de las propias organizaciones de la sociedad civil y la ampliación de la normatividad vigente. Esto alienta el surgimiento de buenas prácticas que promueven el desarrollo económico local, espacios de diálogo y experiencias de gestión ambiental.

2.6.3. Buenas prácticas

En esta sección se detalla el proceso que siguieron cinco buenas prácticas identificadas para mejorar el relacionamiento con la sociedad civil y las comunidades de la industria minera en Perú. Durante la investigación, fue posible identificar y validar un total de cinco buenas prácticas para los niveles Información/Diálogo (2), Colaboración (2) y Alianza. Paralelamente, se han identificado otras prácticas de relacionamiento que no han podido ser validadas por los tres sectores – empresa, sociedad civil y Estado – pero que demuestran esfuerzos que pueden contribuir a ser consideradas para su sistematización y difusión en el futuro. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.

Las buenas prácticas que se presentan a continuación fueron validadas con entrevistas, visitas de campo, revisión de fuentes secundarias y mesas de trabajo y son las siguientes:

- 2.6.3.1. Alianza para promover el círculo virtuoso del Agua: Cerro Verde en Arequipa
- 2.6.3.2. Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo
- 2.6.3.3. Mesa de Diálogo de Huari. Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
- 2.6.3.4. REDyPAC en Hualgayoc: una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía
- 2.6.3.5. Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

2.6.3.1. Alianza para promover el Círculo Virtuoso del Agua: Cerro Verde en Arequipa

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Alianza

DURACIÓN

2006 – 2017

ACTORES PRINCIPALES

Sociedad Minera Cerro Verde SAA (SMCV), Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa.

Ministro de Energía y Minas; Gobierno Regional de Arequipa; municipalidades provincial y distritales;

Frente Amplio Cívico de Arequipa; Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa; Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa; Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú; Frente de Defensa e Integración del Cono Norte de Arequipa; Coordinadora de Frentes (COFREN).





DESCRIPCIÓN

Ampliación extracción de cobre y molibdeno. en 2005 la SMCV planteó duplicar su producción (278 mil Tm de cobre y 6 mil Tm de molibdeno adicionales por año) y extender la lixiviación hasta 2025, aproximadamente, en la región Arequipa, en los distritos de Uchumayo y Yarabamba.

Conflictos de intereses: se generaron conflictos por el uso potencial del agua por parte de la empresa, en un contexto de escasez de este recurso y en que el río Chili, principal fuente de agua, se encontraba contaminado por las aguas negras sin tratar de la ciudad. A la empresa, los sectores sociales demandaron cada vez más recursos para el desarrollo. Una parte de la población con las autoridades municipales distritales y provincial se organizaron contra la empresa, generando un movimiento de protesta dirigido por un comité de lucha constituido para tal efecto.

Mesa de diálogo: tras una marcha de tres mil personas aproximadamente, en 2006, las autoridades nacionales, provinciales y distritales, la sociedad civil y la empresa SMCV iniciaron un proceso de diálogo e instalaron una mesa de diálogo que convocó al primer ministro de entonces, al Ministro de Energía y Minas y los representantes de alto nivel de la empresa. Posteriormente se incorporó el presidente del gobierno regional así como representantes de organizaciones populares²¹⁰. Ellos tenían reuniones quincenales, luego mensuales y finalmente más espaciadas.

Acta de compromiso: los actores firmaron el acta de compromiso en 2006, que establece un acuerdo sobre un convenio marco orientado a la preservación del medio ambiente, el desarrollo de obras de infraestructura y la promoción económica, productiva y social, llamando a una mesa de trabajo, lo que se ha llamado el Acuerdo de Arequipa. La descontaminación del agua del río Chili –con un significativo aporte de la empresa – fue una parte central del acuerdo dado el impacto en la sociedad arequipeña. Este río estaba contaminado principalmente por las aguas servidas de la ciudad.

Alianza para la captación de agua: los actores diseñaron una estrategia que consistió en mayor captación de agua con represas, construcción de la planta de tratamiento de agua potable y mejora de las líneas de distribución de agua potable; retiro de los desagües y tratamiento del río Chili. Se concordó una distribución de gastos entre la empresa y las municipalidades, y se formó una alianza para la ejecución y el mantenimiento de las obras, estableciéndose un fideicomiso inicial de 48 millones de dólares, monto que se incrementó progresivamente

Desafíos y soluciones para la implementación: las dificultades en la implementación incluían que sectores de la población se negaban a vender sus terrenos para las plantas de tratamiento o el atraso en el aporte de la municipalidad. Con el progresivo intercambio se fue ganando confianza y se pudo llegar a concretar los acuerdos, logrando un beneficio colectivo.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

Antes de la buena práctica, existía una competencia por el recurso hídrico entre actores con diferentes intereses. La ampliación de actividades de SMCV, concretada en 2016 y que posibilitaba 30 años de vida útil adicional a la minera, fue considerada una potencial amenaza tanto para el área rural como para el sector urbano que ya sufrían de escasez de este recurso. La buena práctica ha posibilitado mejores relaciones entre los diferentes actores. Se ha logrado incluir una visión común del tema del agua, evidenciando el potencial del trabajo con una perspectiva de desarrollo concordada en un plan a largo plazo. Se logra mejorar la calidad y cantidad de los recursos hídricos, y descontaminar las aguas del río Chili para consumo humano y la agricultura, con una potencial ganancia económica por la calidad del producto a ofrecer.



INNOVACIÓN

Lo innovador en esta buena práctica ha sido el aporte empresarial con una visión de integralidad que fue desarrollándose progresivamente en conjunción con la población y autoridades. SMCV fue altamente innovador al plantear -por ejemplo- el uso de aguas residuales de los desagües de uso humano proponiendo su tratamiento para sus operaciones, lo que (hasta donde se tiene información) no es una experiencia habitual. Esto se vio favorecido por la cercanía de la mina a la ciudad de Arequipa. La población y sus autoridades entendieron que era una salida viable que podría beneficiar a todos, al contarse con inversión garantizada.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: la participación de la sociedad civil a través de una amplia gama de organizaciones vecinales de la provincia de Arequipa, principalmente, fue muy dinámica en el establecimiento de la agenda y la presión para su cumplimiento. En la gestión misma las responsabilidades han recaído en las autoridades gubernamentales regionales y locales. La empresa ha mantenido canales de información periódicos a la ciudadanía sobre los avances de los compromisos.

- Pertinencia según necesidad: la falta de agua y la contaminación del río Chili como principal fuente era un problema real y prioritario que interesaba a la población cotidianamente. La solución planteada es pertinente ya que se ha generado una alianza en una apuesta de "todos ganan".
- Sostenibilidad institucional: técnicamente el sistema tiene una proyección de larga duración, hay compromisos de largo plazo de la empresa y el diálogo está abierto sobre el tema. Hay convenios y contratos firmados y sobre los que las autoridades y sociedad civil hacen seguimiento y se ha previsto presupuestos, sistemas y responsabilidades para sostener las inversiones.



ENFOQUES

Enfoque de Género: las dirigencias de la sociedad civil participantes en el proceso han sido principalmente de varones, que eran quienes ostentaban las representaciones gremiales en esos momentos. Mas el objeto del acuerdo, agua de calidad y en cantidad, mejoras ambientales, etc. es de interés prioritario de las mujeres que ven sus labores del hogar recargadas ante la escasez de agua, por el acarreo, almacenamiento, etc. y porque denotan una mayor sensibilidad al tema ambiental²¹¹.

Enfoque de Desarrollo Sostenible: Los contenidos del acuerdo se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible referidos a agua segura.



LECCIONES APRENDIDAS

Esta práctica demuestra que siendo el agua un bien escaso puede constituirse como eje, al ser priorizado en las relaciones empresa con la comunidad. La visión del ciclo completo del agua posibilita maximizar su potencial así como convocar a más actores.

La interacción de los diversos actores no es lineal y progresiva. Se requiere periódicamente evaluar avances y realimentar los procesos con nuevas iniciativas. Se requiere actualizaciones para refrescar periódicamente los avances y funcionamiento para compartir con la población los logros y compromisos y que éstos se respeten.



VALIDACIÓN

Esta buena práctica ha sido validada con los representantes de la empresa y con líderes sociales y la ONG Labor. Fue mencionada en la mesa de trabajo, realizada el 6 de junio de 2017. Ha merecido reconocimiento público en diversos eventos y por la SNMPE.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

AMAT Alonso 2016. "Minería y escasez de agua: El inédito acuerdo por el agua entre la minera Cerro Verde y la Región Arequipa". http://www.academia.edu/21156855/ARTICULO_CERRO_VERDE_-_Final
<http://www.horizonteminero.com/2017/08/03/cerro-verde/>

2.6.3.2. Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2007 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Compañía de Minas Buenaventura SAA. Autoridad Nacional de Agua, Ministerio de Energías y Minas, Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades Orcopampa y Chilcaymarca. ONG Asociación Civil Labor, comunidades.



DESCRIPCIÓN

Operación minera: en 1967, la Compañía de Minas Buenaventura SAA empezó la exploración de Orcopampa (provincia de Castilla, región Arequipa) aunque éste ya era un pueblo minero desde la colonia, y en 1972 se inició su explotación, siendo una mina subterránea de oro y plata fundamentalmente. En 2016 se recuperaron 191.102 onzas de oro y 692.318 onzas de plata.

Monitoreo de agua: en 2007, se creó el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo (CMAP), que monitorea la calidad del agua desde entonces, en el ámbito de los ríos de Orcopampa y Chilcaymarca. La empresa asumió la importancia del monitoreo como mecanismo preventivo frente a posibles reclamos y conflictos. La ONG Asociación Civil Labor ha asumido la Secretaría Técnica y participa con un equipo de especialistas a cargo que cuenta con un financiamiento propio. La empresa muestra transparencia de información, mostrando los procesos ambientales mediante las pasantías, visitas planificadas a experiencias, instituciones y las propias instalaciones, con fines de aprendizaje. Las municipalidades también participan, nombrando a sus representantes y el alcalde de la municipalidad de Orcopampa preside el CMAP.

Miembros CMAP: está integrado por 16 delegados de las comunidades (dos por cada comunidad y adicionalmente suplentes) empresa, gobierno local y otras entidades, los que debidamente capacitados, realizan dos monitoreos de la calidad del agua. Cada comunidad elige a su delegado/a y se renuevan casi anualmente. Se cubren los gastos de los miembros pero no se asumen honorarios.

Capacitación: el monitoreo convoca una acción de capacitación sistemática (sesiones de capacitación de un día más un día de pasantía) con entidades de alto nivel de especialización, así como mujeres con una participación de alrededor del 40%. El monitoreo se realiza de acuerdo al protocolo nacional vigente (fueron alrededor de 40 empresas mineras que realizaron monitoreo ambiental y del agua en el año 2016) y se trabaja en coordinación con la Autoridad Local del Agua y la Autoridad Regional del Ambiente, realizando las pruebas de calidad del agua en un laboratorio certificado elegido por las partes, el mismo que es visitado por los participantes de CMAP. Un total de 140 líderes comunales y 30 líderes del sector público ha recibido la

capacitación, fortalecieron sus capacidades de liderazgo, y dirigieron los monitoreos en sus comunidades. En cada acción de monitoreo participan alrededor de 20 personas que cuentan con sus cuadernos de campo e instrumental facilitado por la ONG como ente a cargo.

Resultados del monitoreo: hasta 2017, se realizaron dos reuniones de monitoreo en campo por año. Los resultados del monitoreo son entregados por la secretaría técnica a la población en sesiones ampliadas, con dinámicas grupales, por ejemplo, se reconstruye el proceso de monitoreo a través de fotografías y cartillas por parte de los miembros del CMAP tomando como referencia los pasos del protocolo de monitoreo. Se usa presentaciones con diapositivas y diálogos fluidos y mediante una hoja informativa y un boletín. El representante municipal informa también en sesión de consejo municipal los resultados

Respuesta a emergencias: el CMAP está alerta en situaciones críticas. En 2014 se produjo la rotura de un ducto de la relavara, lo que generó una situación de alto riesgo. El CMAP se hizo presente en esa situación y puso de manifiesto sus protocolos.

Ampliación del CMAP a aire y suelos: la perspectiva es ampliar las funciones del CMAP y varios participantes están planteando otras acciones de monitoreo ambiental como del aire y de suelos.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Con anterioridad a que se diera el monitoreo ambiental participativo solo la empresa ejercía esta acción y los demás actores desconfiaban de los resultados. Tampoco se compartían los resultados con la población ni autoridades locales. La buena práctica ha mejorado la comunicación y el diálogo, ha generado confianza y respeto entre las partes y ha mitigado potenciales conflictos. También, se genera y difunde información verídica sobre la calidad del agua, avalada por la Autoridad Local del Agua.



INNOVACIÓN

Se considera innovador el hecho de que el CMAP tenga un proceso realmente organizado para el desarrollo de capacidades y orgánico en el sentido de contar con representaciones de las comunidades y distritos que periódicamente se renuevan y son representativos, a lo que se suma representaciones estatales y de la empresa. Similares experiencias no cuentan con un desarrollo de capacidades consolidado. Asimismo, la activa presencia de las mujeres en el proceso destaca en esta experiencia.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el CMA integra representantes de los diferentes sectores, permitiendo renovación regular de sus miembros de las comunidades por elecciones. Se pone a disposición una capacitación ante los monitoreos y se asegura la posible participación de nuevos miembros, sobre todo jóvenes.
- Pertinencia según necesidad: la práctica responde al interés de la población en vigilar la calidad del agua, ya que es población campesina usuaria del agua y cuidadosa en mantener una fuente de calidad

- Sostenibilidad por consenso: la empresa, el gobierno municipal y la ONG Asociación Civil Labor valoran los monitoreos, se sostiene la presencia de líderes comunales y de las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de los resultados, periódicamente, y ellos socializan esos resultados en sus propios espacios.



ENFOQUES

Enfoque de Género: existe alta participación de las mujeres en el CMAP. Ellas asumen liderazgos proactivos y hay varias técnicas que vitalizan al comité.

Enfoque de Diversidad: hay especial atención para comunicar en forma sencilla y directa tanto a los participantes como a la comunidad en general ya que parte importante de la población es campesina y quechuahablante, contribuye a ello también la información radial.



LECCIONES APRENDIDAS

Sostener por varios años el monitoreo con participación de los diversos actores genera confianza y minimiza fuentes de conflicto. También, contribuye el generar capacidades incluyendo jóvenes y mujeres, con alicientes de certificación.

Contar con una institución de reconocido prestigio profesional e independencia ante las empresas en la Secretaría Técnica fortalece la confianza en la calidad del CMAP como espacio relacional.



VALIDACIÓN

Esta buena práctica ha sido validada con los representantes de la empresa, con líderes sociales y de ONG, además de representantes del GDMDS, y ha sido presentada en dos encuentros nacionales de comités de monitoreo ambiental. Asimismo, ha sido reconocida a nivel nacional obteniendo el primer puesto en el Premio “Cultura del Agua” realizado por la Autoridad Nacional del Agua.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

CARE PERÚ 2012. “Agua y Minería: Hacia una política de mejores prácticas en el uso y protección de los recursos hídricos en cuencas con actividad minera”.

<https://es.scribd.com/document/88587758/Agua-y-Mineria-Hacia-una-politica-de-mejores-practicas-en-el-uso-y-proteccion-de-los-recursos-hidricos-en-cuencas-con-actividad-minera>

http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n_CMVAP_Renee_Menard.pdf

2.6.3.3. Mesa de Diálogo de Huari. AMUCEP - Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Información



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2011 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa minera Antamina, Minera Nystar (luego Quenuales).

Asociación de Municipalidades de Centros Poblados - AMUCEP Huari, Ministerio del Interior, Ministerio de Energías y Minas, Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ahora Secretaría de Gestión Social y Diálogo en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM).

Comunidades, centros poblados.





DESCRIPCIÓN

Inicio extracción: las operaciones del complejo minero polimetálico iniciaron en 2001, produciendo concentrados de cobre (450.000 TM anual), zinc (2015.810 TMF anual), además de molibdeno, plata y plomo.

Inicio de conflictos hasta 2011, no había una percepción ni mejoras evidentes en la calidad de vida de la población. Testimonios de la comunidad señalan que, a partir de la difusión de un estudio social realizado por una ONG se constató los altos niveles de desnutrición y anemia de la niñez en la zona mientras que la población percibía incumplimientos de compromisos de la empresa; el elevado Canon Minero que recibía la municipalidad no redituaba en beneficios a la población, y los acuerdos del Presupuesto participativo tampoco se implementaban. La incorporación de un nuevo dirigente legitimado animó la protesta por parte de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados Huari (AMUCEP) que organizó una acción de presión, paralizando por tres días las comunicaciones y el flujo de tránsito, e incluso tomando una de las instalaciones de la empresa minera, demandando más atención e inversiones.

Comisión para la gestión de conflictos en vista de la escala del conflicto, el gobierno generó una comisión de alto nivel y se firmó un acta donde se recogieron las demandas y se plantearon su tratamiento, con el ánimo de comprometer al gobierno central. En 2012, se instalaron dos mesas de diálogo, ambiente e inversión social. Empezaron los diálogos y negociaciones entre AMUCEP (como representantes de las municipalidades de los centros poblados que son instancias de base de la población), la empresa minera Antamina y las representaciones del Estado, tanto municipalidad distrital como del Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Oficina Nacional y Diálogo Social. También, se integró la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en representación de la iglesia católica que contribuyó efectivamente al diálogo.

Interacción de entre gobierno, industria y sociedad civil: producto de este diálogo, se generó una alianza entre Estado, empresa y población representada por AMUCEP, para llevar adelante proyectos sociales y económicos como la forestación, represas, caminos, carreteras, infraestructura de salud, riego y educación. Los detalles de los proyectos – en este momento vivero y reforestación – son acordados entre los tres sectores. Estado y empresa se reparten los costos, siendo más de 8 millones de dólares lo correspondiente a la forestación (con un aporte de 26% de la empresa y la diferencia el Ministerio de Agricultura y Riego), además de otros en curso. Los comuneros han logrado empleo temporal en el proyecto de forestación. Además hay capacitaciones, pasantías e intercambios. La ONG Caritas asume la gestión del proyecto de forestación. Aunque con retrasos y ciertos incumplimientos de parte del gobierno, se continúa con las obras priorizadas.

Visión de largo plazo: la alianza está construida con una perspectiva de largo alcance y se basa en un “aprender haciendo”, aceptando también retrocesos y retrasos. Se visualizó la necesidad para fortalecer el tejido social, la mayor articulación entre las entidades estatales, y la comprensión mutua, además de definir de mejor manera el alcance del canon minero y la transparencia en el uso de los recursos por parte de las municipalidades.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

El diálogo y la posterior alianza contribuyó a frenar las confrontaciones y avanzar a una lógica de desarrollo colaborativo. Hoy en día, ello se expresa en 3.052 hectáreas instaladas con eucaliptos, pinos y especies nativas. Se vislumbra el procesamiento y la comercialización de la madera y la producción de hongos comestibles. Junto a ello es de destacar los aprendizajes en el diálogo, la identificación de la necesidad de prepararse y tener una actitud concertadora así como priorizar sus demandas. A su vez, las representaciones del Estado tomaron conciencia que el Estado debe mantener sus compromisos y atención a este espacio.



INNOVACIÓN

La mesa propició el desarrollo de capacidades de las autoridades de centros poblados, un pequeño equipamiento y un fondo para el funcionamiento de AMUCEP, lo que le da cierta autonomía.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: fue muy significativo que –a pesar de haber empezado con una protesta violenta– se instalara la mesa de diálogo con la participación de todos los actores y se sostuviera en el tiempo, aunque no todos participan con la misma intensidad.
- Pertinencia según necesidad: la mesa de diálogo es **pertinente** frente a la escasa oportunidad de encuentro que existía entre las partes, y particularmente porque el gobierno central no estaba comprometido con los procesos locales.
- Sostenibilidad institucional: los acuerdos apuntan a proyectos de alta proyección de sostenibilidad ambiental y económica, como es el de reforestación y riego, así como a la continuidad del diálogo y las inversiones concertadas.



ENFOQUES

Enfoque de Género: las mujeres tienen escasa participación aunque muchas demandas atendidas responden a sus intereses. En la provincia, las mujeres no asumen mayormente puestos de liderazgo.

Enfoque de Diversidad: los participantes de la mesa de diálogo hicieron un esfuerzo para lograr un entendimiento cultural y enfrentar las diferencias de lengua.

Enfoque de Transformación de Conflictos: se buscó generar empatías, acuerdos consensuados y responsabilidad en el cumplimiento, para sostener la relación de confianza y prevenir crisis.



LECCIONES APRENDIDAS

El proceso de diálogo multi-actor posibilita que las comunidades conozcan el funcionamiento del Estado, la burocracia, las competencias, los plazos y requisitos así como -al interno- forjar la cohesión en sus demandas priorizando estas.

Las representaciones del Estado han asumido que se necesita reforzar su articulación a nivel del ejecutivo pero también entre los gobiernos municipales distritales, provinciales y regionales.



VALIDACIÓN

La buena práctica ha sido validada con líderes empresariales de Antamina y del Grupo de Diálogo Minería, con representantes de la Defensoría del Pueblo, líderes sociales participantes de la experiencia, de ONG y de la Iglesia.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://gestion.pe/economia/empresas/antamina-produciria-450-000-toneladas-cobre-ano-volumen-similar-2012-31739>

<https://gestion.pe/economia/produccion-zinc-cobre-acumulan-crecimiento-12-6-4-7-primer-semester-2017-140961>

<https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peruana-antamina-preve-duplicar-produccion-de-zinc-y-mantener-la-de-cobre-en-201>

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL PERÚ 2017. "Boletín Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales 160, junio 2017". <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Persistiendo-dialogo-Taller-Evaluacion-experiencia-AMUCEP.pdf>

2.6.3.4. REDyPAC en Hualgayoc: una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2009 - 2015



ACTORES PRINCIPALES

Empresa minera Gold Fields La Cima. ONG CEDEPAS Norte, cooperación internacional Lutheran World Relief (LWR) de EEUU.



DESCRIPCIÓN

Inicios: desde 2005, la empresa Gold Fields La Cima, en la concesión Cerro Corona, realiza explotaciones de cobre y oro (29.886 toneladas métricas finas de cobre y 166 mil onzas finas de oro en 2015), mediante métodos convencionales a tajo abierto y tratamiento de sulfuros mediante la extracción por flotación de concentrados, en la región Cajamarca, provincia y distrito de Hualgayoc, en la comunidad campesina El Tingo.

Iniciativa: la iniciativa de generar una acción conjunta surge de LWR y CEDEPAS Norte, ya que ambas habían desarrollado una relación de cooperación con algunas empresas, y CEDEPAS Norte tenía el contacto local con Gold Fields. Las tres instituciones firmaron un convenio que fue renovado hasta por seis años y aportaron los recursos económicos, siendo Gold Fields el principal donante (alrededor de 500 mil dólares en 5 años), más recursos de LWR y CEDEPAS Norte como implementador. Posteriormente, se logró una contrapartida con fondos estatales para el fortalecimiento de las actividades en ganadería.

Colaboración: el proyecto de colaboración Redes Empresariales y Participación Ciudadana (REDyPAC) tiene como objetivos mejorar los ingresos de los campesinos y ampliar la participación ciudadana del distrito. El propósito de esta alianza es que se tomen mejores decisiones concertadas, en una óptica de que todos ganen.

Retos: no fue fácil implementar el proyecto ya que se pidió contrapartida a los productores en una zona en la que las empresas mineras normalmente habían regalado los insumos, empezando con un reducido grupo. Al ver los resultados en mejoras productivas, poco a poco se interesaron más. En el caso del programa de liderazgo, la calidad de la propuesta, lúdica, dinámica, las pasantías, animó a sostener la participación.

Beneficiario: a partir del proyecto, alrededor de 430 pequeños ganaderos han recibido asistencia técnica con inseminación artificial, dosificación, semillas para la mejora de pastos, pequeños sistemas de riego, micro reservorios, promoción de la agroforestería, entre otros, así como para la mejora de sus pequeñas plantas queseras, obteniendo incrementos en la producción de leche y en sus ingresos (hasta del 60% en la venta de quesos).

Participación ciudadana: el componente de participación ciudadana y desarrollo de capacidades convocó a los y las participantes del componente productivo y otras personas interesadas siendo un total de 163 personas. Un pequeño grupo de participantes se constituyó como el corazón del componente de participación ciudadana motivando a otros a integrarse.

Escuela de líderes: el proyecto creó una escuela de líderes, animaciones con teatro, intercambios, pasantías en la región y a Lima, participación en sesiones del GDMDS, y procesos de interaprendizaje, incluyendo dinámicas innovadoras y la reflexión sobre el propio Yo, conllevando a fortalecer líderes dialogantes con mejores niveles de información y habilidades en lo legal, en la capacidad de negociación y diálogo y en el desarrollo de propuestas viables. Se convocó a expertos e instituciones como la organización no gubernamental Prodiálogo para este programa. Así, los líderes pudieron desarrollar sus habilidades para relacionarse con autoridades de nivel regional y nacional y con funcionarios empresariales, se incorporaron jóvenes y algunas mujeres.



RESULTADO PRINCIPAL

Se ha logrado desarrollar conocimientos y capacidades técnicas (ensilaje de pastos, calendarios sanitarios, mejores prácticas de comercialización, higiene, mantenimiento, registros, etc.) de los productores locales y formar y fortalecer 35 plantas queseras artesanales, generando cinco redes empresariales que comercializan en forma conjunta. Se ha contribuido al mejoramiento de su pequeña infraestructura y equipamiento, con contrapartidas de cada productor. Así, han logrado subir los niveles de producción y el precio de venta, ampliando su cartera de clientes, tanto en Cajamarca como con ventas a Lima. Los productores ven en la ONG y empresa posibles aliados a la vez que no desestiman una mirada crítica a su intervención.

En un contexto de alto nivel de conflictividad regional, como fue la oposición y confrontación en torno al proyecto Conga, los liderazgos promovidos contribuyeron a que en la zona los conflictos no escalaran hacia niveles de movilización de masas y violencia.



INNOVACIÓN

Lo innovador ha sido conjugar a la par experiencias productivas con una labor de capacitación, desarrollando dinámicas innovadoras, conllevando a fortalecer líderes dialogantes con mejores niveles de información y habilidades en lo legal, en la capacidad de negociación y diálogo, y en el desarrollo de propuestas viables. Ellos fueron animadores de nuevas iniciativas presentadas ante la mesa de diálogo de Hualgayoc, mejorando la calidad de la participación. Algunos líderes pudieron desarrollar sus habilidades para relacionarse con autoridades de nivel regional y nacional, y con funcionarios empresariales.

En lo productivo, lo innovador ha sido la adecuación de buenas prácticas productivas a la zona, en la pequeña escala, redituando en mejores precios y calidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: se logró una participación sostenida de 430 productores y 163 líderes sociales con influencia en sus espacios locales y regionales, respetando sus diversos pareceres.
- Pertinencia según necesidad: la actividad ganadera y de producción de quesos a pequeña escala correspondía a las actividades económicas de la zona. Fue pertinente además el desarrollo de liderazgos concertadores en un ámbito con escasa experiencia de diálogo y creciente polarización.
- Sostenibilidad financiera e institucional: la experiencia en los aspectos productivos es sostenible ya que los involucrados están logrando mejoras significativas en nuevos mercados, ingresos, tecnologías, etc. y con cuidado ambiental, aunque demandan asistencia técnica por más tiempo. En lo social, líderes más empoderados tienen como referentes nacionales al GDMS aunque faltaría consolidar espacios regionales para la interacción y fortalecimiento de liderazgos locales.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Muchas mujeres son responsables de las actividades ganaderas de pequeña escala o de las plantas queseras artesanales ya que los hombres salen a trabajar a otras zonas o en las minas. Eso las ha empoderado ya que además varias de ellas se integraron a las actividades de participación ciudadana. En el desarrollo del proyecto se han formado 163 líderes de los cuales 70 son mujeres y progresivamente se incorporó un grupo de líderes más jóvenes. Las mujeres tuvieron un activo rol en el componente productivo, más que en la participación ciudadana, donde un reto es generar formas adecuadas de participación a su contexto cultural para sostener su participación.



LECCIONES APRENDIDAS

Se ha evidenciado que es posible generar confianza entre la empresa y la ONG a partir de experiencias concretas, con una intermediación profesional y autónoma.

El proyecto demuestra que el reto de articular desarrollo productivo y participación ciudadana es válido en tanto se retroalimenten ambos componentes y presenten la posibilidad de contribuir a generar una cultura dialogante y de transformación de conflictos.

Una lección es que un proceso de diálogo y colaboración requiere equipos altamente calificados y con estrategias definidas para convocar y articular respuestas dialogantes ante situaciones de tensión que se generen y para convocar a las mujeres en forma sostenida.



VALIDACIÓN

Representantes de LWR, CEDEPAS Norte, empresa Gold Fields La Cima, líderes comunales y autoridades locales. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

LWR 2016. "Documento interno de evaluación externa de LWR. Final Report Project: Evaluation of Civic Participation Initiatives in Peru". LWR USA.
<https://www.goldfields.com.pe/gamaderia-y-desarrollo-productivo.html>
 AMAT Y LEÓN, Carlos y Francesca DASSO, 2015. "Un lugar para vivir feliz. Redes empresariales y participación Ciudadana en Hualgayoc". Lima, LWR y Gold Fields.
 GOLD FIELDS LA CIMA SA 2013. "Annual Report and Sustainability Report". <http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2014/0cb3d0be4239eb45d8535eff02dd610c.pdf>
https://www.goldfields.com.pe/upload/gold_fields_la_cima/reporte-integrado-2015-esp-final.pdf

2.6.3.5. Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



DURACIÓN

1999 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresas privadas (Compañía de Minas Buenaventura, Anglo American, Antamina, Milpo, Glencore, entre otras). Estado (Autoridad Nacional del Agua, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros). ONG Asociación Civil Labor (Labor), otras ONG como Prodiálogo, CARE, consultoras privadas, líderes sociales, académicos.



DESCRIPCIÓN

Plataforma multi-actor: el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDs) es una plataforma multi-actor reconocida al nivel nacional, incluyendo profesionales, líderes empresariales con una clara opción de responsabilidad social, líderes municipales y de comunidades, consultores y profesionales de ONG.

Su inicio: tiene su origen en 1999 en un contexto de proceso de privatización de los recursos naturales. La ONG Asociación Civil Labor impulsó una serie de reuniones de personas vinculadas al sector minero, animando a establecer un diálogo sobre los procesos en curso particularmente la reforma del mecanismo del canon minero.

Intercambio: temas de significación nacional para el sector fueron presentados en las reuniones GDMDs generando un vivo intercambio de opiniones diversas, pero con un denominador común: la responsabilidad social y ambiental.

Estructura de la plataforma: se han generado cuatro espacios básicos de interacción: (1) El Foro del Grupo de Diálogo es el espacio plenario abierto al público (más de 100 participantes, 2 veces al año) y que incluye una serie de dinámicas particulares, informes y temas de actualidad. (2) El Grupo de Diálogo Directo es el core del espacio dialógico,



aportando en preparar la agenda y las reuniones amplias, pero sobre todo se dialoga fluidamente sobre los temas sensibles, sus reuniones (unas 5 al año) son reservadas. (3) El Comité Coordinador formado por tres personas es un espacio de soporte. (4) La Red Electrónica del GDMDS, Comunicaciones. Anualmente más de 500 personas participan de sus diversas actividades y más de la mitad proviene de variadas regiones además de Lima, e incluso de otros países.

Comisiones: se han establecido comisiones temporales como Consulta Previa, Estudios de Impacto Ambiental, Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente que emiten algunos pronunciamientos.

Plataforma virtual: el mecanismo virtual es otro espacio de tratamiento de los conflictos. La red abierta del GDMDS cobra fuerte dinamismo en momentos críticos, da espacio a grupos de líderes de opinión que exponen sus puntos de vista, a veces controversiales.

Financiamiento: su financiamiento (para las sesiones de trabajo, los traslados de líderes sociales y un pequeño equipo de soporte para la coordinación y la red de comunicaciones) es también de corte multi-actor; pequeños fondos de empresas y de ONG como fuentes más significativas.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

El GDMDS cuenta con un conjunto de expresiones de acuerdos: la visión, los principios del GDMDS que contribuyen a fijar reglas de juego, y algunos pronunciamientos que cumplen un rol de integrar voluntades. El documento Visión de la Minería al 2021²¹² fue formulado en 2015, con cerca de 120 adscripciones.

El GDMDS ha contribuido a generar y fortalecer diversas iniciativas a nivel nacional e internacional, como la Red de Líderes Sociales, el Grupo Ancash y el Acuerdo Regional Arequipa, así como el Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible (GDL), una plataforma latinoamericana de intercambio y trabajo colaborativo, gestada e integrada por grupos e iniciativas de diálogo multi-actor sobre minería de ocho países de América Latina.



INNOVACIÓN

El espacio se sostiene por casi 20 años con la participación de representaciones de diversos actores del sector minero, alimentando diálogos multi-actor pero también en el seno de algunos sectores, como los líderes sociales. El diálogo es presencial, virtual, en espacios pequeños y más amplios, y va enriqueciéndose con la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, por ejemplo. Y, a pesar de no contar con un financiamiento directo y concreto, genera variadas formas para sostener los recursos necesarios para la sostenibilidad del espacio.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el espacio multi-actor es de alta calidad, con fluidez y respeto ante la diversidad de opiniones de empresa, Estado y organizaciones sociales, y matices sobre el tratamiento a los conflictos.
- Pertinencia según necesidad: la temática tratada es altamente pertinente frente a la realidad nacional (conflictos socioambientales, recursos, experiencias innovadoras) y del sector, y contribuye a generar opinión informada y contrastada de los participantes.
- Sostenibilidad financiera: la experiencia del colectivo es sostenible por la naturaleza de la temática que se trata: aspectos ambientales, sociales y económicos del sector. El GDMDS se proyecta en el tiempo al contar con el soporte de diversas fuentes para los gastos básicos del espacio y tener el compromiso de las partes, aunque ello requiere un esfuerzo denodado para captar recursos orientados al apoyo para traslados de líderes sociales de regiones alejadas a los eventos, facilitar encuentros descentralizados, acciones comunicativas, etc.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Hay una creciente participación de mujeres que bordea el 50%.

Enfoque de Diversidad: Concurren a las diferentes sesiones y niveles del GDMDS gerentes de alto nivel de empresas y proyectos internacionales y nacionales. Se busca propiciar diálogos con líderes de comunidades andinas de proyectos mineros ubicados en el norte y sur del país, que se han incrementado en los últimos años. En las reuniones de la Red de Líderes Sociales se presta especial atención a formas comunicativas e intercambios adecuados a diferentes participantes.



LECCIONES APRENDIDAS

La generación de espacios multi-actor contribuye a ampliar la visión de los participantes pero requiere un liderazgo reconocido y tenacidad para convocarlos, definir la agenda y gestionar las diferencias internas.

Una tensión a enfrentar es si el espacio de diálogo debiera intervenir directamente en los conflictos con un rol de mediación o negociación.

Los espacios multi-actor requieren una corresponsabilidad para su gestión, pero manteniendo la autonomía en su accionar.



VALIDACIÓN

La experiencia ha sido validada a partir de diálogo con líderes empresariales, de entidades de cooperación y de sociedad civil, así como con bibliografía secundaria.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

ARBELÁEZ-RUIZ, Diana y Daniel M. FRANKS, 2014. "Sentándose a la Mesa".
http://www.dialogolatinoamericano.org/wp-content/uploads/2015/08/AQ0214_FRANK_SPANISH_LAY03_single-1.pdf
<http://www.dialogolatinoamericano.org/>
 CHÁVEZ, Julio y Marina IRIGOYEN, 2017. "El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMS) como experiencia democrática deliberativa en los procesos socioambientales del Perú, en el siglo XXI". Tesis de Maestría. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/10005>

2.6.4. Análisis de Actores

A continuación, analizamos los actores clave del relacionamiento entre empresa, sociedad civil y Estado en la industria extractiva, incluyendo su accionar en esta temática, así como también algunas de sus fortalezas y debilidades.

Empresa

Destaca la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como el más significativo gremio de las empresas de industrias extractivas, la cual congrega, defiende y promueve los intereses de los empresarios mineros, petroleros y de energía, con preponderancia de los primeros. Ante sucesivos gobiernos nacionales, la SNMPE ha hecho prevalecer su poder por la importancia de la minería en la economía y por tanto se percibe la presión ante las autoridades gubernamentales para limitar controles ambientales, fiscales y solicitar una mayor intervención del Estado en la prevención y gestión de conflictos sociales. Un pequeño grupo de empresas está adscrito a los principios de ICM asociales como también la propia SNMPE, aunque eso no implica que todas las empresas socias lo refrenden y practiquen. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) es un gremio nuevo y busca un espacio propio para expresar los intereses de la industria petrolera enfatizando su competitividad. Tiene una propuesta proclive al diálogo y busca formas de relacionamiento con estándares de buenas prácticas.



Estado

El Estado carece de un ente rector legitimado que articule esfuerzos con los gobiernos regionales y a nivel sectorial, a la vez que cuente con recursos y capacidades, lo que mermaría su capacidad de intervenir en los conflictos socioambientales y llamar al diálogo²¹³. Recae en el gobierno central la principal competencia para atender los conflictos socioambientales²¹⁴ (más del 68% de los casos, seguido de los gobiernos regionales con 17%). Sectores de sociedad civil, principalmente, perciben al Ministerio de Energía y Minas como poco neutral frente a los conflictos socioambientales²¹⁵. En los aspectos ambientales hay un desarrollo significativo de la institucionalidad (normas, reglamentos, instancias como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), aunque es visto como insuficiente la coordinación de éste con las otras oficinas y con los espacios regionales²¹⁶. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, pero la reorganización y posterior

incorporación al Viceministerio de Gestión Social- Presidencia del Consejo de Ministros, así como sucesivos cambios en la coordinación neutralizó su rol. La Defensoría del Pueblo es el actor más reconocido en la intervención en conflictos socioambientales y en la búsqueda del diálogo multi-actor, según señalan las encuestas nacionales. Su función es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona -entre ellos el derecho a gozar de un ambiente saludable- y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Sociedad Civil

Las organizaciones no gubernamentales desarrollan líneas de acción de información, incidencia, y diálogo. Desde una perspectiva crítica, Cooperación - Acción Solidaria para el Desarrollo y el consorcio Propuesta Ciudadana, que aglutina 10 ONG, contribuyen a la transparencia en el sector extractivo mediante reportes y análisis, asistencia técnica y procesos de formación. La ONG Grufides combina la generación de información con la incidencia regional buscando imponer restricciones al ingreso o actividad de empresas mineras. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible es un espacio multi-actor en el cual diferentes ONG como Labor o Prodiálogo juegan un rol importante de articulación.

El Consorcio de Investigación Económico y Social, asociación de 48 instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia, desarrolla análisis, diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos públicos; y busca fomentar el diálogo y la interacción entre la academia, el sector público y la sociedad civil. Cuenta con una línea de investigación: ambiente, recursos naturales y desarrollo rural, que analiza la problemática de las industrias extractivas y que enfatiza su rol analítico y de diseño de propuestas en los años recientes.

Dos representaciones de pueblos indígenas existen en la amazonía. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que cuenta con importantes bases locales aunque tiene dificultades para concertar acciones con las mismas y lleva a cabo acciones reivindicativas y de vigilancia ambiental ante las industrias extractivas. La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) que reúne a importantes etnias de la amazonía, aunque con menos presencia regional que AIDESEP; tiene un acercamiento al Estado, Perupetro y otras empresas extractivas.

La Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria son dos gremios nacionales que mayormente reúnen a federaciones y asociaciones de poblaciones andinas, no necesariamente indígenas. La Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería es un colectivo (suerte de gremio y ONG) que hacia 2010 tuvo alto protagonismo, contribuyendo al desarrollo de capacidades, con movilizaciones y vocería, haciendo visible las problemáticas y demandas de diferentes comunidades andinas. Ha sido enfática en su crítica a las industrias extractivas pero en los últimos años ha sufrido pugnas internas y no se encuentra mayormente activa. La Red Nacional de Líderes Sociales, conformada hacia 2010, es un espacio de diálogo y de coordinación, integrada por cerca de 50 líderes y lideresas de comunidades de las zonas de influencia de la actividad minera, organizaciones sociales de base y gremios, así como de gobiernos regionales y locales, está articulada al GDMS.

La Universidad ESAN y la P. Universidad Católica del Perú (PUCP) son universidades privadas que tienen algunos programas o diplomados en temas de relaciones comunitarias, negociación y similares. En general, los estudios e investigaciones de estas universidades son respetados. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es la universidad pública más importante del Perú y tuvo un convenio con la U. Queensland Australia para mejorar capacidades de sus profesores en temas sociales y llevar a cabo réplicas en otras universidades, aunque no se ha concretado. Además la PUCP y UNMSM cuentan con reconocidas facultades en ingeniería de minas, geología y temas afines.

De reciente constitución destaca el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de Universidad del Pacífico, espacio de investigación, educación, diálogo y reflexión sobre el sector minero. Sus esfuerzos apuntan a la integración del Estado, las empresas y las comunidades mediante políticas públicas y de gestión empresarial consensuadas. Es de creación reciente y busca consolidarse como referente técnico e independiente, a nivel nacional e internacional, para la consultoría y capacitación, orientada a potenciar el desarrollo sostenible de esta actividad económica.

2.6.5. Marco Legal

Según la Constitución Política del Perú (1993), los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. Las circunscripciones de donde se extraen recursos naturales reciben el canon. El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).

La entidad encargada de otorgar los títulos de concesiones mineras en el Perú, administrar el catastro minero nacional y los pagos que hacen los titulares mineros para mantener sus derechos mineros es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMET).

Actualmente, en Perú las licencias de hidrocarburos son asignadas por Perupetro que otorga el contrato si la empresa cumple con los requisitos especificados en el marco normativo para la calificación de empresas, contratación y suscripción de contratos. La licencia está asociada a la aprobación del lote mediante concurso público o negociación directa. En cuanto a licitaciones otorgadas, en el período 2015 y 2016 no han existido casos de procesos de licitación en el sector hidrocarburos²¹⁷.



Información

La Constitución Política del Perú, el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (en su art. 6 del Título Preliminar) y la Ley General del Ambiente consideran el derecho de las personas a ser informadas en general y sobre las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas, la integridad del ambiente y los recursos naturales, así como a participar en la definición de la política general y adopción de medidas relativas al ambiente y a los recursos naturales.

En el sector minero la Ley General de Minería No. 23453 (1992) y el Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector minero DS No. 028-2008-EM y el DS N° 052-2010-MEM/DM enfatizan en brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución, promover el diálogo con las población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo las opiniones de la población.



Diálogo

La misma Ley reconoce las mesas de diálogo como espacio de participación. Se han generado el Protocolo de Relacionamiento, el Plan de Participación Ciudadana y los Planes de Relacionamiento con las Comunidades que van de la mano de una Guía de Relaciones Comunitarias de obligatorio cumplimiento. En hidrocarburos, el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos DS N° 012-2008-EM. Art. 17 y 18 prevé el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.

En hidrocarburos, el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos DS N° 012-2008-EM. Art. 17 y 18 prevé el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. También considera las etapas del proceso de participación ciudadana: en la negociación o concurso y suscripción de los contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos; durante la elaboración y evaluación de los estudios ambientales; y posterior a la aprobación de los estudios ambientales. Sin embargo, entidades especializadas denotan que “se verifica que Perupetro no cumple su función y no garantiza la participación ciudadana durante la etapa de concurso y negociación conforme lo dispone el propio reglamento que textualmente señala que «compete a PERUPETRO S.A. conducir el proceso de Participación Ciudadana de las áreas en las cuales se esté negociando o concursando para la suscripción de un Contrato de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos»”²¹⁸.



Consulta

Existe una significativa normatividad referida a la participación de las poblaciones alrededor de las industrias extractivas. Parte de ella está asociada a la realización de los estudios ambientales. Los diferentes tipos de estudios ambientales: Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA SD) y el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) deben incluir un Plan de Participación Ciudadana²¹⁹. Si bien los estudios ambientales se dividen en categorías, existe un procedimiento similar en cada uno de ellos, incluyendo (1) la difusión en los lugares de

mayor afectación del proyecto, la información y documentos en un formato sencillo y claro y solicitando a la comunidad o sus representantes antecedentes u observaciones sobre el proyecto de inversión propuesto. (2) Convocatoria pública a los procesos de participación ciudadana, a través de los medios de prensa de mayor difusión y medios electrónicos de comunicación. (3) La audiencia pública se realizará en la zona donde se desarrollará el proyecto de inversión, procurando que el lugar elegido sea aquel que permita la mayor participación de los potencialmente afectados. (4) El proceso de participación pública debe ser debidamente documentado y registrado en el expediente, siendo de conocimiento público toda la información generada a partir de dicha consulta.

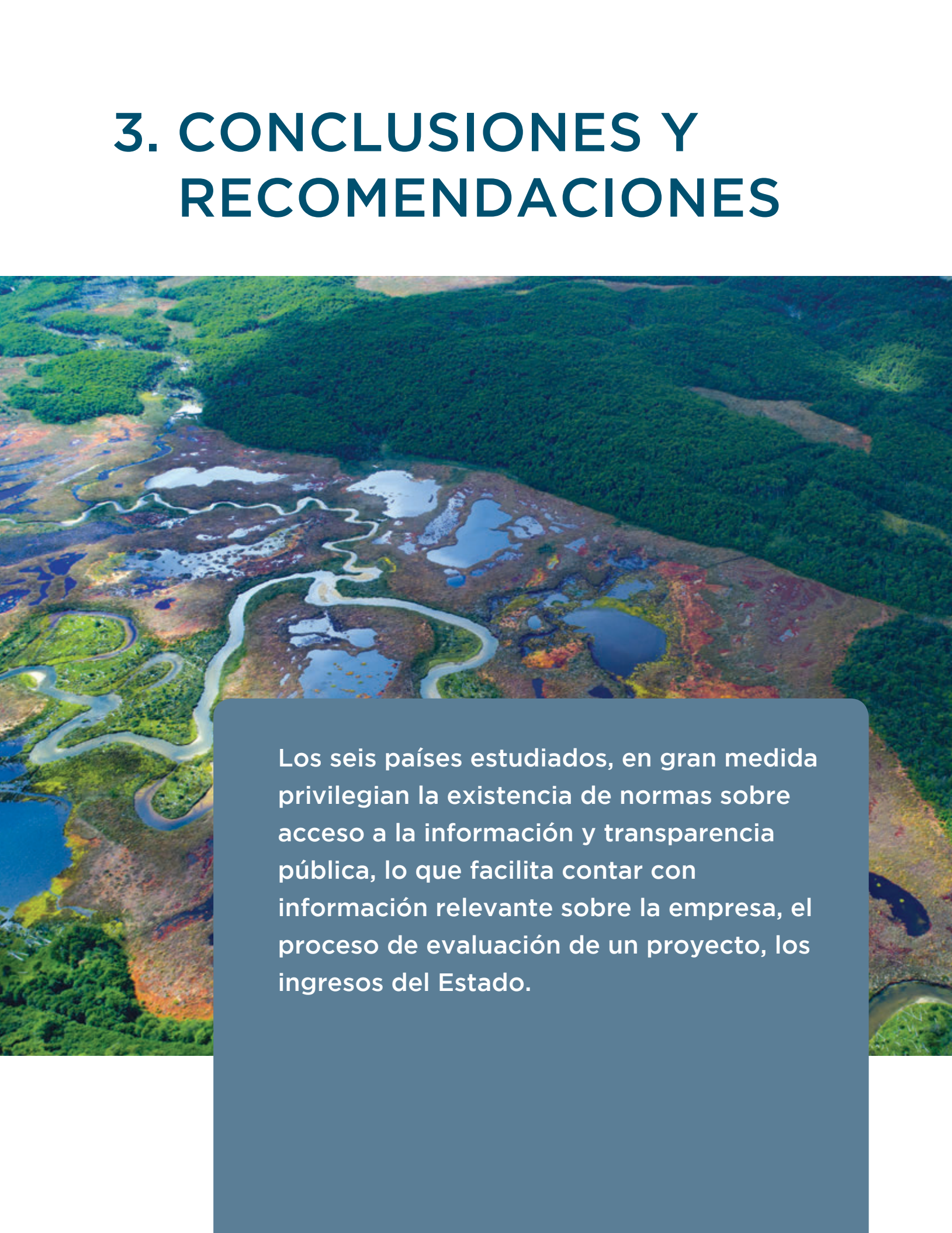
La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley N° 26505) establece que las personas tienen derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos referidos a la actividad minera. Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana las acciones o medidas que tomen las autoridades, los titulares mineros o las poblaciones involucradas, que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. La autoridad competente determinará los mecanismos a considerar en los procesos de participación ciudadana, según resulten apropiados, de acuerdo con las características particulares del área de influencia de la actividad minera, del proyecto y su magnitud, de la población involucrada, la situación del entorno y otros aspectos relevantes.

En 2008, se promulgó el Decreto Supremo No. 028-2008-EM y la Resolución Ministerial No. 304-2008-MEM/DM modificados por la Resolución Ministerial 009-2010-MEM/DM, que extiende sus provisiones a la modificación de los EIA semidetallados, la modificación de las actividades de exploración minera Categoría II, la modificación de estudios ambientales por ampliación y la modificación de las actividades de explotación o beneficio minero. Se destaca que reconoce el derecho a la información, la vigilancia ciudadana, el diálogo continuo. Se exige que las empresas cuenten con un Plan de Participación Ciudadana y un Plan de Relaciones Comunitarias y se establece que los mecanismos de participación ciudadana deben contemplar preferentemente la implementación de una Oficina de Información Permanente o un Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo. Estos siguen vigentes aunque se ha reconocido la normatividad específica para el ejercicio del derecho a la Consulta Previa.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de la República en 1993 y entró en vigencia en el Perú desde el 2 de febrero de 1995. En 2011, se aprobó y promulgó la Ley del Derecho a la Consulta (Ley N° 29785). Además de la Ley y Reglamento sobre la Consulta Previa (D.S. N° 001-2012-MC) se cuenta con una Guía Metodológica publicada por el Ministerio de Cultura²²⁰.

La Ley N° 29785 señala que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, “salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes”. Indica además que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es el encargado de brindar, concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. En ese marco, se ha desarrollado una Directiva de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, que ha identificado (al 2016) a 55 pueblos indígenas u originarios. La primera Consulta Previa en hidrocarburos en el Perú fue la del Lote 169 (región Ucayali) y en minería recién se inició en 2015; las experiencias están en progresivo ajuste.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita contar con información relevante sobre la empresa, el proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del Estado.

3.1. Conclusiones

Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores

- El sector extractivo sigue manteniendo un sitio de importancia en cuanto a su aporte a la economía de América Latina, a pesar de la conclusión del denominado súper ciclo de los commodities mineros e hidrocarburíferos. Los marcos normativos nacionales se adecuaron para promover el arribo de grandes inversiones en este sector, como se puede apreciar en la apertura del sector hidrocarburífero en México, anteriormente bajo el monopolio estatal, con la reforma energética del 2014. Estas políticas han contribuido a que ingresen corporaciones internacionales las cuales han aumentado el nivel de los estándares de relacionamiento comunitario, y como consecuencia del incremento de la recaudación fiscal han contribuido, en conjunción con la sociedad civil, a impulsar mecanismos multi-actor que favorecen la transparencia, como es el caso de la EITI que viene operando auspiciosamente en algunos países de la región.

Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento:

- En relación a los marcos normativos nacionales, aparte de la normativa referida a la industria extractiva, medioambiental, fiscal y de desarrollo, los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre la empresa, proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del estado en algunos casos. La información que proveen las industrias extractivas al Estado en el marco de sus obligaciones está sujeta a este marco regulatorio.
- Igualmente, las normas que contemplan la participación ciudadana como derecho a participar en las distintas fases de la actividad extractiva están muy extendidas en los seis países estudiados y se manifiesta, como una de sus dimensiones, a través de la figura de la consulta pública.
- La información identificada en cada país da cuenta de que no existe normatividad específica referida a otros niveles de relacionamiento como colaboración o alianzas a excepción de Perú que cuenta desde el año 2010 con una norma que establece un compromiso previo de la empresa con las comunidades del área de influencia, como requisito para el desarrollo de las actividades extractivas.
- El diálogo es un mecanismo que se encuentra, en sentido amplio, en todos los niveles de relacionamiento comunitario y está incorporado en segmentos de la normativa vigente al momento de regular los procedimientos participativos y de consulta.
- La mayoría de los países de este estudio han firmado el Convenio 169 de la OIT, salvo República Dominicana, pero solo Colombia, Perú y Chile cuentan con una reglamentación para implementarlo. De hecho, en los otros países el proceso depende de la interpretación hecha por las empresas y las autoridades locales, con posibilidades de cuestionamiento y judicialización del proceso, causando inestabilidad e inseguridad para las partes.

Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador

- Cuando las prácticas están conformadas por varios niveles de relacionamiento, frecuentemente es el nivel de diálogo el que suele articularlas. Los diálogos podrían evolucionar hacia la definición de agendas de trabajo específicas.
- Debido al grado de complejidad que exige su implementación, por lo general, el relacionamiento a través de los niveles de colaboración y de alianza, suele producirse a través del diálogo multi-actor, en su versión más estructurada, al que fundamentalmente se recurre como mecanismo más propicio para aclarar los intereses y necesidades de las partes, así como para generar la confianza necesaria que exigen estos procesos complejos y negociar acuerdos de beneficio mutuo.
- El relacionamiento multi-actor adecuadamente organizado y gestionado y con mirada estratégica e integral, contribuye a implementar proyectos vinculados a planes de desarrollo local, a elevar las voces de los actores involucrados, a influir en las decisiones sobre la operación, así como sobre los planes de relacionamiento, a mejorar la relación y a contribuir al logro o la vigencia de la licencia social.

Sobre los principales actores

Sociedad Civil

- Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades, las ONG y los movimientos sociales, asumen diferentes roles frente a la industria extractiva: como proveedores o contratistas que ejecutan proyectos sobre desarrollo; tendiendo puentes e impulsando procesos colaborativos; siendo críticos de la forma como viene operando la industria; promoviendo el debate y haciendo incidencia en políticas públicas y en garantizar derechos individuales y colectivos de las comunidades u oponiéndose abiertamente a la actividad extractiva a través de acciones de resistencia.
- Las universidades que gozan de legitimidad son importantes recursos locales puesto que tienen la confianza de una cantidad relevante de actores como el poder de tejer redes con actores claves de diferente naturaleza, tanto en materia de generación de conocimiento como en el fortalecimiento de capacidades. Son vistos como un actor especializado e imparcial para asuntos técnicos y para realizar investigaciones sobre la industria extractiva.
- Las OSC se desempeñan también desde un rol de terceros en los procesos de relacionamiento entre comunidades y empresas, sea facilitando el diálogo o la negociación entre las partes, asesorando los procesos, capacitando a la empresa y/o comunidad para una participación adecuada y constructiva en los procesos, siendo observadores, o acompañando en la implementación de los proyectos de desarrollo.

Estado

- La relación entre el Gobierno Nacional/Federal con los Gobiernos Regionales/Estatales/Provinciales y Locales suele generar tensiones derivadas de las políticas y medidas referidas a la gobernanza de los recursos naturales. En situaciones extremas, las tensiones, eventualmente, han llegado a una franca oposición y rechazo hacia la industria extractiva. Resulta, por tanto, importante que los diferentes niveles de gobierno establezcan mecanismos de coordinación y diálogo intergubernamental para la discusión concertada e implementación de políticas públicas referidas al desarrollo económico sustentable, y determinen cuál es el papel que juegan las industrias extractivas en el desarrollo del país y los territorios locales.

Empresas

- Los equipos dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario son imprescindibles para la operación de campo, articulados con las otras áreas de las empresas. Esta articulación interna es importante y necesaria. En algunos casos, las empresas optan por la contratación o suscripción de acuerdos con consultoras, organizaciones/entidades comerciales o de la sociedad civil especializadas en gestión social y relacionamiento comunitario. En algunos casos considerar a un equipo externo para apoyar el relacionamiento comunitario facilita los encuentros de diálogo, además de contar con una mirada externa del proceso.
- Los gremios de las industrias extractivas tienen como finalidad fundamental representar los intereses y necesidades de las empresas afiliadas. Tienen el potencial de ser importantes contribuyentes a través de proyectos dirigidos a las empresas en su relacionamiento con las comunidades, incluyendo perspectivas innovadoras, como la buena práctica de las Cuencas Sociales de Argentina, que desde la Cámara de Minería de Salta articula a las diferentes empresas mineras que operan en un territorio en su relacionamiento con las comunidades del entorno.

Sobre los temas abordados en las prácticas

- Las buenas prácticas incorporan una gama temática sumamente amplia, vinculadas a las necesidades humanas y derechos de los entornos sociales y a las necesidades operativas de los proyectos extractivos. Desde un nivel básico de información sobre el proyecto, todos los niveles de relacionamiento dan pie a la incorporación de asuntos de múltiples tipos, como:
 - » Temas ambientales, como aquellos vinculados al agua, aire, ruido, uso de la tierra;
 - » Búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad vinculadas a las necesidades de la operación (infraestructura en salud, vialidad, electricidad, agua potable, entre otros);
 - » Manufactura de productos;
 - » Educación y servicios básicos;
 - » Asuntos que atañen a grupos específicos como mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad;
 - » Cuestiones sobre desarrollo local;
 - » Establecimiento de relaciones duraderas en el marco del desarrollo sostenible y la licencia social;
 - » Fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y local.

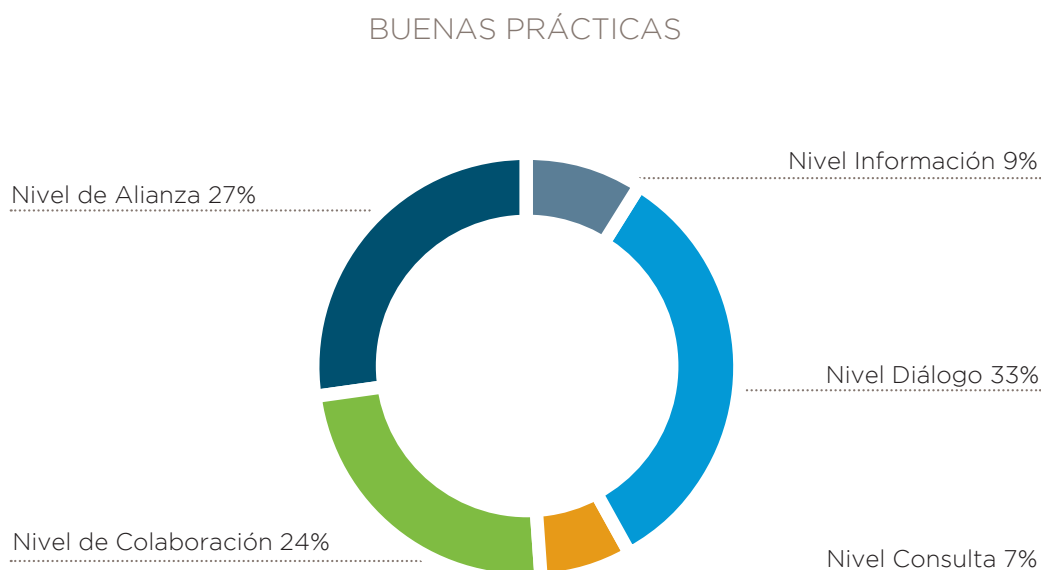
Sobre el relacionamiento

- *Aporte del sector extractivo en la economía nacional y regional:* Existe un reconocimiento de parte de todos los actores que el sector hace aportes relevantes a la economía nacional. Sin embargo, a nivel local las comunidades aun sienten que existe una deuda pendiente de parte de la industria al desarrollo y mejora local.
- *Estándares mínimos de relacionamiento:* La industria extractiva, en relación con otras actividades económicas, considera el tema del relacionamiento con las comunidades del área de influencia como parte relevante, inclusive en ocasiones como parte clave para el negocio y no como un tema netamente voluntario. Existe consciencia de los potenciales costos que puede significar para el desarrollo de un proyecto extractivo un entorno de riesgo social.
- *Lo exigido y lo voluntario:* Los procesos de relacionamiento reflejan que el comportamiento de la industria se derivan tanto de las normas definidas por el Estado como por las políticas internas de las empresas (códigos de conducta) y los estándares de la industria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado está empezando a asumir un rol más activo en definir estándares mínimos de relacionamiento, en base a las buenas prácticas reconocidas y con ello dar seguridad tanto a las empresas como a las comunidades sobre la mejor forma de establecer relaciones armoniosas y constructivas orientadas al desarrollo sostenible. Adicionalmente la industria sigue avanzando en políticas voluntarias que benefician el desarrollo del territorio en la cual está la operación.
- *Las OSC:* En los últimos 5 años han cumplido un importante rol, logrando una cierta incidencia en las decisiones de políticas públicas, a la hora de proponer, acompañar y velar por el cumplimiento de la normativa de los proyectos de la industria extractiva. Han logrado en los diferentes niveles (local, regional/provincial y nacional) de incidencia, que se reconozcan sus aportes para alcanzar objetivos comunes con la industria. Sin dudas esta incidencia se vio favorecida por el uso masivo de las redes sociales y el desarrollo de la transformación digital.
- *El relacionamiento con la sociedad civil en continuum:* La construcción de confianza es una tarea prioritaria. Adicionalmente quienes faciliten y participen en estos espacios de construcción de buenas prácticas de relacionamiento deben ser actores con conocimiento y trayectoria en esta materia, que faciliten los procesos de interacción; actores imparciales que construyan un relacionamiento permanente y útil reconociendo las diferencias de cada una de las partes.
- *Percepciones respecto a las industrias extractivas:* Aún existe rechazo hacia el sector extractivo por parte de algunos sectores. Generalmente, estos se basan en la percepción de que el crecimiento de la actividad extractiva no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades que conviven con los proyectos extractivos, y que en algunos casos han visto desplazadas las actividades económicas previamente existentes (agricultura, turismo local, ganadería, entre otras), generando dependencia a una actividad finita, además de la preocupación por los impactos ambientales y a la salud que pudiera traer consigo esta actividad.

- *De conflicto al acuerdo negociado:* La revisión de algunas prácticas estudiadas da cuenta de que la relación entre la industria extractiva y las comunidades ha pasado de un proceso de conflicto y oposición a un proceso de negociación transaccional que compensa a las comunidades con beneficios sociales, empleo y obras de infraestructura. Esta dinámica eventualmente aporta a los procesos de desarrollo local.
- *Tejido interno de las comunidades:* Muchas veces, la complejidad de las relaciones al interno de las comunidades han generado tensiones que se traducen en reclamos de difícil comprensión y donde las empresas sin contar con metodologías para abordar la conflictividad de manera más amplia e integral.
- *Rol del Estado:* La característica histórica del Estado ha sido conservar una posición distante y mirar desde afuera los procesos de relacionamiento que se dan en los diferentes niveles entre las empresas y las comunidades. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un actor clave en el nivel de consulta.

Sobre las prácticas de relacionamiento

- Este estudio ha encontrado en los diagnósticos de los seis países 27 buenas prácticas en todos los niveles de relacionamiento, 5 a nivel de Información, 18 a nivel de Diálogo, 4 a nivel de Consulta, 13 a nivel de Colaboración, y 15 a nivel de Alianza. Cabe agregar que en la mayoría de las buenas prácticas se han identificado dos o más niveles simultáneamente.



- Grandes avances: Las buenas prácticas del estudio muestran que ha habido varios avances en miras a mejorar la relación entre la industria y las comunidades, tales como la incorporación de políticas corporativas de relacionamiento, equipos de profesionales especializados y recursos económicos. Sin embargo, todavía hay debilidades en el relacionamiento entre la sociedad civil y las industrias extractivas. Las experiencias documentadas han contribuido al aprendizaje y a la generación de nuevas e innovadoras prácticas de relacionamiento que pueden ser aprendidas, mejoradas y replicadas en otros proyectos.
- Se considera que el sector extractivo tiene una gran experiencia de buenas prácticas, reconocidas y validadas con resultados positivos para la calidad de vida y el relacionamiento de actores, labor que debería ser orientada tanto a las comunidades, academia como a las propias empresas.
- Un conflicto observado en la mayoría de las buenas prácticas estudiadas es la oposición al proyecto por parte de la comunidad, por la forma en la que el proyecto convive con su entorno (ambiental, social, cultural) y/o por la falta de beneficios directos y al desarrollo de la comunidad. El diálogo se destaca como el canal necesario para resolverlo, siendo una alternativa para establecer acuerdos y negociar con la comunidad. Los espacios de diálogo se hacen necesarios para resolver las problemáticas de pequeños sectores rurales del entorno de una gran explotación extractiva. Por ejemplo, alianza para mejorar la producción ganadera .
- Instancias de participación ciudadana temprana: Las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no cuentan con la participación efectiva y el consenso de los gobiernos locales y comunidades de los territorios. Sin este paso que le da legitimidad social al proyecto, los procesos de participación ciudadana (incluyendo la consulta previa) se tornan complejos, lentos y/o conflictivos.
- Las alianzas entre OSC han comenzado a jugar un papel de acercamiento comunitario, como es el caso del Clúster de Energía Coahuila cuyo papel, entre otros, es informar sobre las implicaciones de la reforma energética y el nuevo papel de las empresas en la región. La intermediación de la sociedad civil puede ayudar en que la información sea más confiable y por ello mejor aceptada por las comunidades.

3.2. Recomendaciones

Para las empresas

- Contar con una planificación temprana, oportuna y a largo plazo de relacionamiento con las comunidades que contribuya al progreso económico y atención de temas de orden social y ambiental en los territorios donde desarrollan sus proyectos.
- Contar con un área dedicada exclusivamente a la gestión social y las relaciones comunitarias. Este estudio, ha podido constatar que contar con un área y equipo de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a desarrollar mejores prácticas.
- Considerar las particularidades del territorio y asimilar como una buena práctica el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades. Se recomienda incluir dentro de sus protocolos de debida diligencia un levantamiento de información detallada sobre la dinámica del territorio y las comunidades presentes en el área de influencia, ya sea de la mano de la comunidad o posteriormente validada por ella.
- Coordinación regular con los líderes comunitarios desde el principio involucrándolos en los diferentes niveles de relacionamiento, información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas.



- Generar acciones por nivel de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas que sean revisadas sistemáticamente, que incluyan plazos para su revisión y que sean flexibles para ser replanteadas, que tengan objetivos, metas y tiempos bien definidos desde el principio, que se apeguen a la legislación y que busquen un relacionamiento con acompañamiento constante y sistemático.
- Seguimiento a las acciones derivadas de la legislación referida a las industrias extractivas, en lo ambiental y en lo social, con el cumplimiento y continuidad a los acuerdos de las mesas de diálogo con coordinación intersectorial e intergubernamental.
- Fortalecer a los gremios y organizaciones representativas de las empresas que pueden participar en los más diversos espacios de diálogo y concertación para una mayor fluidez en el relacionamiento.
- Propiciar capacitaciones para fomentar alianzas con proyectos en los territorios, incentivando la participación comunitaria.
- Considerar a las Agencias Multilaterales de Desarrollo (MDB por sus siglas en inglés) líderes en América Latina y el Caribe que cuentan experiencia en el relacionamiento ciudadano²⁷¹ para un enfoque interdisciplinario en la región y con experiencia comparada en temas de sociedad civil como aliados técnicos en la elaboración de planes de relacionamiento, así como a OSC del país con experiencia territorial, para fortalecer los principios de relacionamiento entre empresas y comunidades gracias a sus conocimientos técnicos y cercanía con la comunidad.
- En la medida que las actividades extractivas van a producir afectaciones ambientales, se recomienda que las empresas prioricen el cumplimiento ambiental en el marco de las legislaciones nacionales, así como el relacionamiento social con información oportuna, veraz y transparente, promoviendo el relacionamiento con las comunidades para el análisis de los problemas y la toma de decisiones.

Para la Sociedad Civil

- Formar una estructura orgánica que permita dar a conocer los líderes comunitarios representativos como legitimados para dar información en tiempo oportuno, interactuando con el gobierno, las empresas y otras comunidades si fuera el caso, para la elaboración de iniciativas conjuntas en el marco de un relacionamiento sistemático y no solo circunstancial.
- Por la disparidad de culturas, ritmos y tradiciones, es necesario que el Estado y las empresas adapten espacios de relacionamiento a esta realidad. Asimismo, las propias comunidades para alcanzar resultados efectivos han de identificar los recursos para acercar sus enfoques de un modo oportuno.

- Asegurar la integración de los miembros de las comunidades por parte de los líderes comunitarios, en las decisiones sometidas a consulta como así en aquellas instancias de influencia a través de mesas temáticas que contemplen la disparidad de género, y con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como la apropiación de conocimientos por parte de la comunidad. El trabajo de los líderes comunitarios para la participación significativa de la comunidad evidenciada en las prácticas analizadas ha sido clave para transformar la percepción que tienen las comunidades sobre la industria extractiva, mejorar las relaciones existentes y prevenir el surgimiento de conflictos.
- Los líderes comunitarios deben estimular y promover la disseminación de información oportuna así como diálogos con miembros de la comunidad y de las personas de las empresas cuyas labores están relacionadas, para la elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en las distintas fases de la actividad extractiva.
- Los líderes comunitarios y las empresas pueden apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados a fortalecer capacidades de diferentes grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, minorías) en procesos que incorporen una mirada integral de territorio, para que se pueda tener un desarrollo sostenible e independiente de la presencia de la empresa.
- Contactar a actores imparciales, (como universidades), para la resolución de problemas y toma de decisiones en relación a conflictos internos de la comunidad o con los otros actores (gobiernos, empresas).

Para el Estado

- Implementar acciones de monitoreo periódico para recibir retroalimentación sobre la percepción que tienen tanto la sociedad civil como la empresa. La experiencia muestra que el monitoreo es importante para involucrar a otros actores y sectores, comunicar sobre la práctica, dar más transparencia y hacer ajustes necesarios de acuerdo con especificidades locales.
- Contar con metodologías para las consultas públicas incluyendo a las autoridades locales, minorías (grupos de mujeres, ancianos, jóvenes). Se sugiere construir procesos sistemáticos y periódicos de los niveles de información y diálogo, habilitando la colaboración con mecanismos de quejas, accesibles desde la misma comunidad y de forma anónima.
- Promover la participación ciudadana temprana indispensable para generar espacios de relacionamiento que promuevan oportunidades de crecimiento y mitiguen impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, prevenir conflictos, construir confianza y legitimidad social, así como optimizar el valor potencial en las regiones.
- Reglamentar la aplicación de la Convención OIT 169 con estándares mínimos para las consultas públicas. Respaldar la labor de los organismos de supervisión, fiscalización y de revisión de los estudios ambientales, sosteniendo y afinando los mecanismos de participación y Consulta Previa (Convenio 169 OIT), el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos.
- Fortalecer los instrumentos ambientales que permitan a la autoridad ambiental vigilar el cumplimiento de los planes de mitigación y los compromisos en materia del cierre de proyectos extractivos. La planeación anticipada del cierre económico y ambiental

es un aspecto de gran relevancia para contener pasivos ambientales y sociales y a la postre mejorar la percepción que tienen las comunidades en la zona de influencia de los proyectos y de la población en general.

- Fortalecer mecanismos de transparencia para la administración de los fondos generados por las rentas de la actividad extractiva apoyando nuevos proyectos, que a su vez generen nuevos emprendimientos en las regiones ricas en recursos naturales de modo de asegurar la creación de empleos de fuentes alternas, que fortalezcan las economías locales innovando y generando ingresos a largo plazo.
- Capacitar a los gobiernos locales sobre los temas que afectan los intereses de sus territorios, apoyando la generación de capacidades políticas y técnicas que apoyen y articulen los procesos de ordenamiento territorial.

Para los tres actores

- Utilizar las nuevas tecnologías a favor de formas más eficaces de relacionamiento. La madurez de los sistemas democráticos de la región, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, está dando una oportunidad sin precedentes para que responsables de los gobiernos, oficiales de empresas y líderes comunitarios cuenten con nuevos instrumentos de acercamiento e información para la discusión de intereses territoriales comunes.
- Tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y de las comunidades, resulta relevante fomentar y acercarse a través de espacios de relacionamiento con acciones de información oportuna y confiable; promoción de diálogos que incluyan minorías, consultas públicas siguiendo regulaciones sectoriales que hayan contado con instancias de información y dialogo previos, promoción de colaboraciones en formación de capacidades que permitan un desarrollo territorial sostenible, promoción de alianzas en acciones de monitoreo participativo y/o de desarrollo de pequeñas empresas.
- Construir planes de relacionamiento iniciado por cualquiera de los actores principales, con actividades claras genera confianza, por lo que un rol más activo del gobierno y de grandes empresas en el fomento de espacios de concertación, donde las comunidades participen contando con la previa información y capacitación para exponer intereses y preocupaciones representa, como lo demuestran los hallazgos, un avance para el crecimiento sostenible.
- Incluir a otros recursos existentes, OSC locales, y sobre todo universidades con legitimidad para fortalecer un relacionamiento sostenible.
- Informar y revisar las proyecciones sobre los recursos de las industrias extractivas y los límites para la dinamización de la economía, reconociendo que esta es una actividad que depende de una serie de variables ajenas a planificaciones específicas. En particular, los espacios subnacionales han de proyectar sus actividades considerando recursos de otras fuentes y del sector extractivo, de forma de no generar frustraciones por eventuales variaciones en las transferencias desde el gobierno nacional. En este aspecto se requiere reforzar la información y análisis de las proyecciones de las industrias extractivas con autoridades y líderes de la sociedad civil, teniendo como base las acciones de transparencia de las industrias extractivas en marcha.

4. HOJA DE RUTA

A continuación, se propone una hoja de ruta elaborada a partir de los hallazgos del diagnóstico. La misma tiene como objetivo ofrecer lineamientos claros a representantes de empresas, de agencias gubernamentales y de la sociedad civil, para fortalecer la articulación de estos tres actores, promoviendo espacios de interacción que se enfoquen en el territorio y respondan a las necesidades de las comunidades. Esto con la meta última de contribuir con los esfuerzos para promover una actividad extractiva responsable como sinónimo de desarrollo.





Hoja de Ruta de Perú

Actores: En el desarrollo de la presente Hoja de Ruta se evidenció el especial interés que habría en el Perú en fortalecer la participación de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según el art. 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM esta es el órgano con autoridad técnica normativa a nivel nacional responsable de prevenir, gestionar y solucionar controversias, diferencias y conflictos sociales; y por ser parte de la PCM tiene la responsabilidad de coordinar las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial.

GOBIERNO:



Nivel Información

El marco normativo peruano promueve diversos mecanismos participativos que enfatizan brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades extractivas proyectadas o en ejecución y promover el diálogo con la población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo sus opiniones. Retomando la experiencia del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible que anima el acercamiento multi-actor a nivel nacional, se plantea que sería positivo considerar espacios descentralizados en ámbitos de concentración de empresas extractivas, para que las diversas autoridades de gobierno brinden información de calidad sobre temas relacionados con el desarrollo de la minería. Las experiencias de monitoreo participativo, como en México, son otras oportunidades para brindar información. En ellas se valora la pertinencia y calidad de la información, así como las formas comunicativas con una mirada intercultural.



Nivel Diálogo

Las normas peruanas en el subsector minero de Perú reconocen mecanismos de Diálogo como la vigilancia ciudadana y el monitoreo ambiental, indicando que las empresas contemplen una Oficina de Información Permanente o Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo. Se cuenta con al menos 40 comités de monitoreo participativo. La Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua y OSINERGMIN como entidad de fiscalización, pueden compartir su conocimiento y práctica de monitoreo generando un espacio de intercambio y diálogo a partir de los hallazgos del monitoreo, posibilitando tomar decisiones sobre el cuidado del recurso hídrico.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo, con involucramiento de la Defensoría del Pueblo, puede tener un rol para impulsar una Mesa de Diálogo descentralizada, que contribuya a acercamientos de varias empresas y comunidades, en ámbitos donde se den intervenciones múltiples; la experiencia del GDMDS ilustra este proceso a nivel nacional. Es de especial importancia que se facilite acercamientos con metodologías que favorezcan el diálogo productivo, cara a cara, en “espacios seguros”, enfrentando las condiciones de asimetría. Probablemente ello requiera de un facilitador de las sesiones de trabajo. Así como en Argentina, la autoridad regional puede cumplir un rol de coordinador y fiscalizador convocando a representantes de las empresas y a la comunidad para que compartan experiencias y coadyuven en el establecimiento de puentes ante divergencias.



Nivel Consulta

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo está incorporado en la Constitución peruana y además se cuenta con una ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (N°29785, 2011) con su respectivo reglamento. La aplicación de estos marcos legales es relativamente reciente, en minería a partir del año 2015, estando los procedimientos en progresivo ajuste, aunque persisten cuestionamientos de parte de la sociedad civil. El Ministerio de Cultura podría enfatizar la interacción con el Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo procesos de Consulta previa transparentes y con mirada intercultural, potenciando la intervención de la Defensoría del Pueblo y otros entes reconocidos como imparciales. Para esto, se podría tomar como referencia la buena práctica del Diálogo con el Pueblo Wayuú en Colombia, que aun tratándose de otro nivel de relacionamiento, proporciona elementos interculturales importantes que pueden servir de referencia.



Nivel Colaboración

En Hualgayoc dos ONG y la empresa minera GoldFields lograron aunar fuerzas con el programa estatal FondoEmpleo para la mejora productiva de campesinos pobres. Pero el involucramiento del Estado es complejo por la naturaleza de los requerimientos y tiempo de tramitación, lo que amerita su revisión. También en Colombia diversas instancias del Gobierno formaron parte de una iniciativa de fomento a proyectos forestales y productivos sostenibles con empresas, en zonas afectadas por la explotación del carbón. Esta experiencia destaca el compromiso del Estado y su involucramiento en la planificación del desarrollo y el monitoreo. Incluso instituciones educativas agropecuarias son activas participantes, lo que se constituye como un modelo referencial.

Sería conveniente que Perú considerara -desde el Ministerio de Energía y Minas y con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- incentivar acciones colaborativas multi-empresas, en espacios de confluencia de varias intervenciones extractivas para potenciar resultados



Nivel Alianza

Son pocas las ocasiones en las que el Gobierno peruano establece alianzas con terceros. De alguna forma se han dado oportunidades en que se conjuga la Colaboración y Alianza para el desarrollo productivo (aunque no así para el desarrollo de capacidades). El marco legislativo es limitado en este campo, requiriéndose flexibilizarlo para la incorporación efectiva del desarrollo de capacidades en la planificación presupuestaria, y una orientación más clara a las autoridades para su implementación.



Nivel Información

Los comités de monitoreo ambiental participativo en Orcopampa y en México y las mesas de diálogo se han presentado como espacios para que las organizaciones de sociedad civil recojan y soliciten información sobre temas ambientales e informen de acciones en curso con la empresa, teniendo la oportunidad de socializarla con su comunidad o grupo de influencia. Contribuye a la calidad de la información contar con medios de difusión adecuados y oportunos, como cartillas, informativos, programas radiales, etc.

SOCIEDAD CIVIL



Nivel Diálogo

La sociedad civil ha sido tenaz impulsora del Diálogo multi-actor en Perú. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible se ha constituido como un canal de interacción de múltiples actores, incorporando enfoques innovadores como la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, contando con un soporte múltiple para la sostenibilidad del espacio. La apuesta de la sociedad civil es generar espacios descentralizados, con base en la configuración política administrativa (región, municipalidad) o de cuenca, convocando representaciones institucionales para el desarrollo como en Argentina o con participaciones más personales de líderes multi-actor. Cualquiera de ellas requerirá conjugar fuerzas con entidades del Estado como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.



Nivel Consulta

No hay mayor experiencia de Consulta Previa sistematizada en Perú que se presente como una práctica de éxito. El Viceministerio de interculturalidad, como órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo en el Perú, sería beneficiado de sistematizar las experiencias de Consulta Previa tanto en actividades hidrocarburíferas como en minería, convocando a la academia y entidades de sociedad civil para este fin.



Niveles de Colaboración y Alianzas



ONG y universidades forman parte de acciones Colaborativas o alianzas tanto con empresas como con el Estado, ilustrando procesos de conjunción de saberes y especialidades que reeditan en la calidad de la propuesta, sea en temas ambientales, propuestas de desarrollo económico, etc. Es de destacar que estas conservan su autonomía y ponen por delante el profesionalismo y los aspectos consensuados definidos. Así se constituyen en una pauta a replicar que se fortalecerá trabajando con transparencia y rendición de cuentas.

EMPRESA



Nivel Información

La normatividad peruana es fecunda en términos del requerimiento de brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución, promover el Diálogo con la población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo las opiniones de la población. La empresa debe jugar un rol activo en brindar Información, reconociendo el derecho de la población y de la comunidad de mantenerse informada de las acciones que se den en el territorio. A partir del proceso de monitoreo ambiental, afirmando la Colaboración y el Diálogo, la empresa podrá intercambiar información sobre sus sistemas de gestión ambiental y resultados del monitoreo a los recursos hídricos (y del suelo o del aire) en espacios de Diálogo seguros, con delegados comunales y autoridades, dando respuesta a las preocupaciones ambientales de la población.

La mesa de Diálogo de Huari ha sido una oportunidad para el encuentro de actores diversos, donde se intercambia información y preocupaciones sobre el desarrollo. En Argentina, se observa cómo se constituye un espacio común reuniendo a varias empresas y comunidades, para que estas puedan plantear sus inquietudes y obtener una respuesta única y consensuada desde el sector empresarial en un proceso fiscalizado por el Estado. En su primera fase el espacio se focalizó mayormente en el intercambio de Información sobre los proyectos.

Uno de los mayores esfuerzos sistemáticos de facilitar Información especializada es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que se implementa en varios países, incluyendo México. La misma que promueve la transparencia en los flujos económicos derivados de la explotación de minerales, petróleo y gas de los países que son miembro y que cuenta con la participación de una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, inversores y organizaciones internacionales. También EITI se implementa en Perú y se recomienda fortalecer la difusión de sus hallazgos a nivel sociedad, coordinando con los medios.



Nivel Diálogo

Un amplio proceso de Diálogo multi-actor, se generó en Arequipa alrededor del agua y en Huari por obras para el desarrollo, ambos posteriormente a un conflicto, evidenciando cómo todos los actores, incluyendo la empresa, requieren desarrollar sus capacidades dialógicas, sostener su voluntad de Diálogo y presentar canales bilaterales de tratamiento de conflictos en caso necesario.



Nivel Consulta

En Perú la Consulta Previa a los pueblos Indígenas y originarios es de aplicación reciente, tanto en hidrocarburos como minería. Tampoco existen muchas experiencias sistematizadas en los diferentes países de la región. En República Dominicana se ha avanzado en el involucramiento de las comunidades con base en Consultas amplias normadas por ley, en la planificación del desarrollo a nivel municipal, con la intervención de empresa y Estado.

Se sugiere el acompañamiento de terceros a los procesos de Consulta Previa en el sector extractivo en Perú, para analizar y sistematizar su desenvolvimiento, revisando el rol de la empresa que por norma no participa directamente del proceso.



Nivel Colaboración

En el caso de Perú, son muchos los esfuerzos de empresas que en forma individual llevan a cabo acciones colaborativas con organizaciones de sociedad civil. Los monitoreos participativos, desarrollados en Perú con activa participación de empresas, así como en otros países como el caso de México, delegan en una entidad especializada y reconocida la labor técnica, conllevando a cambios en la percepción, comunicación y relación de la empresa con la comunidad de una manera positiva, fortaleciendo un relacionamiento de largo plazo. Pero se potencia el impacto con la conjunción de empresas, caso del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba - CGDBU que reúne a las socias del Consorcio Camisea, a cargo de la explotación de gas, para atender las demandas de las poblaciones indígenas.

El reto es cómo desarrollar acciones colaborativas a nivel grupal de las empresas, rompiendo los límites de la acción bilateral a acciones de mayor impacto. En Colombia, se han mostrado resultados positivos de la Colaboración a cargo de diversas empresas por el desarrollo forestal, como resultado de afectaciones a un conjunto de comunidades. Igualmente, en Argentina con el Proyecto Cuencas Sociales y en Chile con la Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda empresas que trabajan en la misma zona se agrupan para llevar a cabo iniciativas en los territorios de influencia de sus operaciones, involucrando a comunidades y gobiernos locales.



Nivel Alianza

El Proyecto REDyPAC de Hualgayoc ilustra cómo una acción Colaborativa y de Alianza entre agencia de cooperación internacional, ONG y empresa, impulsa con éxito un innovador programa de desarrollo productivo (mejoramiento ganadero y de producción quesera) con el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de ciudadanía. Igualmente, la Alianza para promover un Círculo Virtuoso del Agua es una demostración de esfuerzo multisectorial de empresa con diferentes niveles de Gobierno para la ejecución y mantenimiento de obras de beneficio colectivo en torno a captación, tratamiento y distribución del agua del río, lo que ha posibilitado mejorar las relaciones entre los diferentes actores y construir una perspectiva de desarrollo concordada con un plan a largo plazo, además de claros beneficios en la cantidad y calidad del agua para la población.

En Perú se podría explorar más profundamente la generación de alianzas de empresas con ONG para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, como se ha dado en República Dominicana con base en la maestría y compromiso de estas.

Notas del diagnóstico regional

1. La mayoría de los proyectos extractivos se encuentra en el área rural y las comunidades aledañas son los principales actores afectados con los que se buscan relacionar las empresas en primera instancia. Otros actores importantes son municipios pequeños con un alto índice de población rural. Proyectos cercanos a ciudades medianas o grandes, como en el caso de Arequipa, Perú, o en Chile, son menos frecuentes, ver por ejemplo: Valor Minero, 2017: Los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en la zona central, Las Condes; Valor Minero, http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios_desarrollo_futuro_mifffferia_zona_central.pdf.
2. Cameron, Peter, y Michael Stanley, 2017: Oil, gas and mining – A sourcebook for understanding the extractive industry, Washington: The World Bank, p. 19.
3. Los criterios como también los detalles de la metodología empleada se encuentran en el anexo 1.
4. Ver marco metodológico conceptual (anexo 2). Para mayor información ver BID, 2018: Grupo BID – Sociedad Civil, <https://www.iadb.org/es/sociedad-civil/home>
5. Ver Milano, Flavia y Andrea Sanhueza, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para agencias ejecutoras pública y privadas, Washington: BID, <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
6. A los fines de esta investigación son los recursos no renovables petróleo, gas y minerales metálicos, estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación)
7. La página web de la ICCM es <http://www.icmm.com/en-gb>
8. Los miembros del ICCM se comprometen a cumplir con 10 principios para contribuir al desarrollo sostenible, ver: ICCM, 2015: Sustainable Development Framework: ICCM Principles, London: ICCM, http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015_icmm-principles.pdf
9. La página web de la IOGP es <http://www.iogp.org>
10. Con este fin, IOGP ha formado diferentes comités, como por ejemplo el de ambiente, que pretende poder responder a las demandas de diferentes actores, ver: IOGP, 2018: Our committees, <https://www.iogp.org/our-committees/>.
11. Wilson, Emma, Sarah Best, Emma Blackmore y Saula Espanova, 2016: Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries, London: International Institute for Environment and Development, <http://pubs.iied.org/pdfs/16047IIED.pdf>.
12. Por un lado, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron lanzados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con empresas y algunas organizaciones no gubernamentales, en 2000, ver: Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre del 2000, http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf. Son los únicos estándares de Derechos Humanos que están diseñados exclusivamente para el sector extractivo. Actualmente, se han adherido 30 empresas a los principios, ver: Voluntary Principles, 2018: For companies, <http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/>. Por otro lado, en 2011 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se aplican a los Estados y a todas las empresas transnacionales y de otro tipo, ver: Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2011: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos – Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar”, Nueva York / Ginebra: NNUU, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf.
13. Salmón, Elizabeth (coord.), 2016: La Progresiva Incorporación de las Empresas en la Lógica de los Derechos Humanos. Lima: Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDHPUCP), p.17-18.
14. Diferentes estudios constatan los retos de una mayor vinculación de la economía local con el sector extractivo en los países de América Latina. Ver por ejemplo: Rudas, Guillermo, 2014: Notas sobre la minería de carbón a gran escala en Colombia, en: FES (Friedrich Ebert Stiftung): La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales, Análisis 1/2014, p. 5-22. Albrieu, Ramiro, 2012: La macroeconomía de los recursos naturales en América Latina, en: Albrieu, Ramiro; Andrés López, y Guillermo Rozenwurcel (coord.) Los Recursos Naturales como Palanca del Desarrollo en América Del Sur: ¿Ficción o Realidad? Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, p. 105-147.
15. Ed O'Keefe, director de Synergy Global, en una entrevista realizada por Sarah Busque, el 10 de diciembre de 2013, en: Borealis, 2013: Claves para mejorar las prácticas en las relaciones comunitarias, <https://www.boreal-is.com/es/blog/mejorar-relaciones-comunitarias/>.
16. Wilson 2016, cit. arriba.
17. Ibid.
18. ICCM, 2012: Mining's contribution to sustainable development, InBrief, Junio 2012). Ver también: López-Morales, José Satsumi, y otros, 2017: Strategies of social responsibility in Latin America: a content analysis in the extractive industry, en: Ad-Minister (Universidad Eafit), No. 31 julio a diciembre 2017, pp 115-135.
19. Oxfam Internacional y Social Capital Group (SCP), 2007: Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú.
20. Es importante diferenciar el gobierno nacional como poder ejecutivo de otros actores estatales como el poder judicial o el poder legislativo. El análisis a continuación se refiere al poder ejecutivo exceptuando cuando sea señalado de otra manera.
21. Ver Penfold, Michael y José Luis Curbelo, 2013: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera directa. Tendencias y realidades en América Latina, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 10 / 2013. Corporación Andina de Fomento (CAF).
22. Medina, Leandro, 2010: Efectos dinámicos de los precios de las materias primas en las posiciones fiscales de América Latina, CAF Working Papers No 2010/02.
23. Marczak, Jason y Peter Engelke, 2016: América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, Washington: BID, p. 21.
24. Datos de los diagnósticos de este estudio. Estas cifras no incluyen el empleo indirecto.
25. Monge, Carlos, 2017: Minería y marco institucionales en la región andina, Lima: NRGi / GIZ, p. 3-14.
26. Marczak 2016, cit. arr., p. 21
27. El único país de este estudio que no ha ratificado el convenio 169 es la República Dominicana.
28. En Argentina, no existe norma legal que regula el convenio. En México, la reforma constitucional de 2011 incorporó el Convenio 169 de la OIT a la constitución que está regulado mediante un protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicado mediante decreto, ver: Castillo Lara, Clara, 2017: La constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en: Alegatos, No. 97, p. 575.

29. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
30. En Chile, hay un Ministerio de Minas y otro de Energía.
31. CONADI, 2018: <http://www.conadi.gob.cl/>
32. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
33. Salinas Alvarado, Carlos Eduardo, 2011: La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia, consultado en: <https://revistas.ueh.ueh.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>.
34. Wilson, Emma, 2016, cit. arriba.
35. Ibid.
36. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
37. De hecho, "en muchos países de América Latina las consultas populares sobre minería se han convertido en un conflicto entre gobiernos nacionales, por un lado, y gobiernos locales y actores sociales", ver: Dietz, Kristina, 2017: Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa, en: Colombia Internacional (93), 93-117, p. 96.
38. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), 2014: Pactos Igualdad – Hacia un futuro sostenible, p. 294 - 298.
39. Sanborn, A. Cynthia, y Juan Luis Dammert, 2013: Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú, *Americas Quarterly*, p. 26. Perry, Guillermo y Mauricio Olivera, 2009: El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia, CAF, documentos de trabajo 2009/06.
40. Mayores ingresos para los gobiernos locales no necesariamente se traducen en una mejora de la calidad de vida. Ver por ejemplo: Paredes Gonzales, Maritza Victoria, 2016: Los efectos del boom de las industrias extractivas en los indicadores sociales – países andinos, Natural Resource Governance Institute. Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Cobre, 2013: Minería en Chile: impacto en regiones y desafíos para su desarrollo; Chile.
41. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
42. IIED, y otros (International Institute for Environment and Development, Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, World Business Council for Sustainable Development), 2002: Abriendo brecha: minería, minerales y desarrollo sustentable, IIED, p.224.
43. Respecto a las diversas necesidades de formación, ver por ejemplo: CEPAL / UNCTAD, 2003: Guía para la gestión de las autoridades locales de pueblos y distritos mineros de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, consultado en: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/13966/lcr2114e.pdf>.
44. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
45. IIED, y otros, 2002, cit. arriba, p. 204.
46. Astorga, Eduardo, Francisco Carrillo, Mauricio Folchi, Magdalena García, Bernardo Grez, Bernardita McPhee, Claudia Sepúlveda, y Hans Stein, 2017: Resumen ejecutivo informe final proyecto: evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el período 1998 – 2015, Santiago de Chile: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), p. 12-13.
47. Watkins, Graham, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, María Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, Andreas Georgoulas, 2017: Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, Washington: BID, p.20-1.
48. Davis, Rachel y Daniel Franks, 2014: Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, Harvard: Harvard Kennedy School.
49. Ibid., p. 21.
50. Wilson, Alana y Miguel Cervantes, 2013: Survey of Mining Companies 2013: Vancouver: Fraser Institute.
51. Watkins et al 2017, cit arriba, p.5
52. Saade, Hazin, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile CEPAL.
53. Franks et al. 2014, cit. arriba, p. 7576
54. Ibid
55. CEPAL: Argentina: Perfil Nacional Económico, http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish.
56. Elaborado sobre la base de datos del INDEC: https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39, según categoría: Minas y Canteras.
57. Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal de Impuestos Período 2017 (1): <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ley23548.pdf>.
58. Cabe destacar que el sector de hidrocarburos tiene una mayor preponderancia en la cantidad de puestos de trabajo registrados con un 66,6% de los empleos registrados en 2016, en comparación con los 33,4% de los empleados de la industria minera metalífera para el mismo año. Elaborada sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_empleo.asp
59. Jueguen, Francisco, 2017: El desempleo terminó 2016 en 7,6%, según el Indec, en La Nación, 16 de marzo de 2017, <https://www.lanacion.com.ar/1994231-el-desempleo-termino-2016-en-torno-al-76-segun-el-indec>. Según este artículo, la PEA fue de 18 millones de personas en 2016.
60. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, www.noalamina.org.
61. Fundación Cambio Democrático, 2017: Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Capital Federal, <http://cambiodemocratico.org/2017/02/07/plataforma-argentina-dialogo-para-uso-sustentable-recursos-naturales/>.
62. El Atlas de Justicia Ambiental es liderado por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su propósito es recolectar historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo el mundo. Los datos son enviados desde los diferentes países por academia, ciudadanos preocupados, comités informales y organizaciones no gubernamentales. Un equipo de edición verifica los datos. Es importante mencionar que el tipo y el número de los conflictos registrados depende de la perspectiva de los actores que envían los datos por lo que no se trata de un dato objetivo. En este documento, se emplean los datos del atlas cuando no existe una cifra más confiable en el país, como es el caso de Argentina. Para mayor detalle de la metodología del Atlas, ver: Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. *Journal of Political Ecology* 22: 255-278. El link de acceso al Atlas de Justicia Ambiental es: <https://ejatlas.org/>.

63. CIPPEC, Fundación Vida Silvestre, y Consejo Empresarial Mendocino, 2015: Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza, <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1052.pdf>.
64. Chubut (Ley 5001, 2003), Tucumán (Ley 7879, 2007), Mendoza (Ley 7.722, 2007), La Pampa (Ley 2349, 2007), Córdoba (Ley 9526, 2008), San Luis (Ley 634, 2008), Tierra del Fuego (Ley 853, 2012)
65. Conflicto Famatina: desde 2004, se realizan en Famatina, provincia de La Rioja, acampes, marchas y cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas. Así la población ha logrado impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, el de la salteña Midais tras la pancarta de "El Famatina no se toca" Conflicto Esquel: en julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto ubicado a diez kilómetros de esta ciudad. Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal y en noviembre nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Luego de varias marchas, el Concejo Deliberante aprobó una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación del yacimiento de oro y plata. Si bien la consulta no era vinculante los resultados hicieron que se suspendiera la ejecución del proyecto.
66. Velarde Ponce de León, Claudia, 2018: Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina, <https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina>.
67. Se han identificado una serie de otras prácticas que no han podido ser validadas en el marco de este estudio. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.
68. La investigación de campo concluyó en 2017, por lo que se puede asegurar la duración de la buena práctica solo hasta este año, lo que no excluye la posibilidad de que sea vigente en el futuro. Esta observación es válida para todas las buenas prácticas.
69. Este espacio es accesible a la comunidad y ésta ha planteado dentro del mismo problemáticas a las cuales se les ha buscado soluciones (falta de leña - donación, falta de capacitación minera - aula móvil, falta de comunicación - wifi libre para toda la comunidad)
70. La innovación se refiere a prácticas que fueron novedosas al momento de su validación en el país respectivo.
71. Cada buena práctica fue evaluada según las dimensiones participación, pertinencia y sostenibilidad en base a indicadores diseñados anteriormente. Para mayor información referirse al marco conceptual y metodológico, 4.3. (anexo 2).
72. Todas las buenas prácticas que incluyen el diagnóstico fueron analizados según la consideración de los siguientes enfoques: enfoque participativo, enfoque de regulación de derechos y obligaciones; enfoque de desarrollo sostenible; enfoque de diversidad; enfoque de igualdad de género; enfoque de transformación de conflictos. Las definiciones se pueden revisar en el marco conceptual (anexo 2). Si los enfoques no son mencionados en el análisis de la buena práctica, significa que no se han encontrado elementos que indican su inclusión en la implementación de la buena práctica.
73. Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration - an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario, p. 194.
74. Ibid.
75. Información suministrada por PAE.
76. Cámara Argentina de Empresarios Mineros: HMS, <http://www.caem.com.ar/hms/>.
77. Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse a provincia de La Rioja con su conflicto en Famatina antes mencionado y la postura del gobernador de la provincia. DyN, 2011, Beder Herrera les pidió a los ambientalistas que se "dejen de joder" con la minería, Clarín Noticias, 31/05/2011, https://www.clarin.com/medio_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria_Q_Skl-TiWawXx.html.
78. Una organización importante es Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). FARN ha realizado diferentes estudios, entre otros sobre la explotación de Litio. Respecto a las actividades extractivas sostienen: Los efectos sociales y ambientales de este tipo de actividades son demoledores: destrucción ecológica, pérdida de bosques naturales, deterioro del suelo, contaminación por agroquímicos, desplazamiento de comunidades locales, nula generación de empleo de calidad e incluso violación de derechos, entre otros. Desde FARN afirmamos que no existen políticas extractivas que sean amigables con la sociedad, ni con el ambiente (<https://farn.org.ar/actividades-extractivas>).
79. Un ejemplo es la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, un movimiento vecinal que surgió en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut y se extendió a otras localidades del país. Según su página WEB, ya se encuentran en 15 lugares del país. No posee una organización formal con cargos y funciones. Sus acciones y su presencia como grupo opositor a la minería son muy fuertes en Argentina. Para mayor información, véase: Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, cit. arr.
80. Universidad Nacional de San Martín, <http://www.unsam.edu.ar>
81. Puede mencionarse como ejemplo, las Universidades de San Martín y Tres de Febrero que realizaron durante varios años capacitaciones a los docentes de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la mina Bajo La Alumbrera
82. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación, 2015: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Tierras y registro nacional de comunidades indígenas, <https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/6.-INAI-Tierras-y-registro-nacional-de-comunidades-indigenas.pdf>
83. Por ejemplo, referente a las instancias de participación en el marco del Informe de Impacto Ambiental. Ejemplos son: Ley N° 123 de Evaluación del Impacto Ambiental de Buenos Aires, última modificación publicada el 18/05/2012. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, provincia de Santa Cruz, publicada el 21/08/2003. Ley 10.208. Política Ambiental Provincial (Córdoba), publicada el 27/06/2014.
84. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016: Informe del estado de ambiente 2016, Buenos Aires. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf.
85. Covo, María Julia, 2013: Derecho de minería y energía - El principio de congruencia de la ley general del ambiente en el Derecho Minero, en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 10, no. 43, p. 151-160; p. 153
86. La producción de petróleo y gas es marginal en Chile y la autora no encontró cifras macroeconómicas que incluyen el petróleo. La producción petrolera se concentra en ENAP, una empresa del Estado, cuyo objeto es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Para la producción de Gas Natural existen 10 empresas agrupadas en un gremio. El reporte de sustentabilidad de ENAP señala que la producción de petróleo en Chile, (Región de Magallanes) alcanzó 987 millones de barriles para 2016; en tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes), alcanzó a 1.004 millones de metros cúbicos estándar (5.909.500 barriles equivalentes). Las exportaciones de ENAP llegaron a 0,42 millones de metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo que equivale al 3,8% de la producción total de sus refinerías.

87. Consejo Minero, 2018: Cifras actualizadas de la minería, <http://dev.consejominero.cl/wp-content/uploads/2018/03/Cifras-actualizadas-de-la-miner%C3%ADa-Marzo-2018.pdf>.
88. Comisión Nacional de Productividad 2016: Productividad de la Gran Minería el Cobre, <http://www.comisiondeproductividad.cl/productividad-de-la-gran-mineria-del-cobre/>
89. Consejo Minero, 2018, cit. arr.
90. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
91. Consultado en: Sociedad Nacional de Minería, El nivel de empleo en la minería es el más bajo de los últimos siete años, <http://www.sonami.cl/site/noticias/el-nivel-de-empleo-en-la-mineria-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-siete-anos/>.
92. Comisión Chilena del Cobre, 2017: Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Metales 1997-2016, Santiago de Chile, <https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario-%20avance7-10-7-17.pdf>.
93. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
94. -Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, Santiago de Chile, <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5>.
95. Comisión Minería y Desarrollo de Chile Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014: Minería. Una Plataforma de futuro para Chile, http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una-plataforma_futuro_para_chile.pdf.
96. Hallazgos Mesa de Trabajo Industrias extractivas realizada el 18 de agosto 2017 en Santiago de Chile para este estudio.
97. Alianza Valor Minero, Seminario Valor Minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe_seminario_inversion_dialogo_desarrollo.pdf.
98. Informe Sistematización Caracterización Socio-Ambiental Proyecto Acuerdo Territorial Para El Desarrollo - Localidad De Sierra Gorda. Agencia de Cambio Climático- Alianza Valor Minero septiembre 2017.
99. Ibid.
100. No se cuenta con información de los montos de inversión social de las empresas en Sierra Gorda.
101. Alianza Valor Minero es una institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible, Valor Minero, <http://www.valorminero.cl/valor-minero/>
102. Chile Transparente, Transparencia Caimanes, Santiago de Chile, <http://www.chiletransparente.cl/project/transparencia-caimanes/>.
103. Nueva Unión, 2017: Corproa elige a Nueva Unión como "Empresa Destacada del Año", <http://www.nuevaunion.cl/noticias/2017/corproa-elige-a-nuevaunion-como-empresa-destacada-del-ano>.
104. Ibid.
105. Política de Pueblos Indígenas Nueva Unión. Consultada en : Nueva Unión, Sustentabilidad, <http://www.nuevaunion.cl/sustentabilidad>.
106. Desarrollo Futuro de la minería en la zona Central. Diagnóstico y recomendaciones para la sostenibilidad. Alianza Valor Minero. Noviembre 2017
107. Otras iniciativas entre diferentes sectores son Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo, Consejo Consultivo para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Grupo de Exploraciones Sustentables, Grupo de Trabajo Agenda 2030, Mesa de trabajo Mujer, Minería y buenas prácticas del ministerio de Minería.
108. Alianza Valor Minero, cit. arr.
109. Alianza Valor Minero, cit. arr.
110. Ministerio de Minería, Misión Institucional, <http://www.minmineria.gob.cl/mision-institucional/>.
111. Mapa de las organizaciones de la sociedad Civil 2015. Centro de Políticas Públicas Universidad Católica (2016).
112. Villalobos, Fernanda, 2017: Ambientalistas y rechazo a Dominga: Quiénes gobiernan "están tomando las decisiones correctas", Santiago de Chile, <http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html>.
113. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas , <http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas>.
114. Portal Minero, 2014: Corte rechaza recursos contra proyecto minero El Morro, <http://www.portalminero.com/display/NOT/2014/04/29/Corte+rechaza+recursos+contra+proyecto+minero+El+Morro?showComments=true&showCommentArea=true>.
115. OIT (2014) Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. Matías Abogabir. ES ESTO UNA FUENTE DE LIBRO O DE PÁGINA WEB? POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS DATOS SEGÚN EL FORMATO ENVIADO.
116. Delamaza, Gonzalo, 2011: Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Revista de la Universidad Bolivariana, volumen 10, N°30, 2011, pp. 45-75.
117. Ministerio de Desarrollo Social, 2013: Decreto Supremo N° 66 .
118. OIT (2014) Matías Abogabir. Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión.
119. DANE, 2016: Atlas Estadístico de Colombia, Bogotá, <http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/>.
120. Incluye carbón, níquel y petróleo y sus derivados de las exportaciones tradicionales del país para el 2016. Ibid.
121. No existe información oficial para establecer una repartición de ingresos a nivel nacional o central.
122. De acuerdo con las cifras del DANE, para 2016 el total de la población ocupada es de 22,8 millones. La definición de la población ocupada incluye personas en una de las siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
123. Observatorio de las industrias extractivas en Colombia, 2015: El sector extractivo en Colombia 2014, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, y otros, http://media.wix.com/ugd/ef61f6_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf.
124. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr
125. Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 2017: Tendencias de la Conflictividad Socioambiental en América Latina y Propuestas para su Abordaje, Quito, https://www.flla.net/publicaciones/doc_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html.
126. Fundación Foro Nacional por Colombia, 2017: La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en Colombia, Bogotá: Foro Nacional por Colombia y Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/reporte-colombia.pdf>.

127. La Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 ("PND") clasifica los tipos de minería en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería.
128. Fundación Avina y Gestión Ambiental Estratégica, 2012. Elementos diagnósticos para una caracterización de la minería en Colombia. Bogotá, Colombia. Mesa de Diálogo permanente de Minería en Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?
129. Ley 34 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
130. Morales, Lorenzo, 2017. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible, Bogotá: Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf
131. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Bogotá, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-II-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>.
132. Morales 2017, cit arr.
133. Jiménez, Carlos Mario, 2017: En 6.3 % aumentó producción de carbón en el Cesar, <http://elpilon.com.co/en-6-3-aumento-produccion-de-carbon-en-el-cesar/>.
134. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar es la autoridad encargada por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
135. Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
136. Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Bogotá Colombia. En bibliografía consta el link: Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Disponible en: <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
137. <?> Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. Bogotá, Colombia. En bibliografía consta el link: Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
138. <?> Ministerio de Minas y Energía: Relacionamento Territorial, <https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial>.
139. <?> La Resolución 0322 de 2015 adopta el manual específico de funciones y competencias del Ministerio del Interior.
140. <?> La Ley 1444 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como organismo técnico con autonomía administrativa y financiera -sin personería jurídica- para el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. La ANLA debe asegurar que los proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento cumplan con la normativa ambiental (Decreto 3573 de 2011).
141. <?> Departamento Nacional de Planeación, 2016: Evaluación de operaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que mida la capacidad con la que cuentan para lograr sus objetivos y proponer acciones de mejora para el fortalecimiento integral de las mismas y el mejoramiento de la gestión ambiental en el país, Bogotá, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR_Producto_4_Informe_Resultados_v20161128.pdf
142. <?> Ministerio de Ambiente, 2013: Decreto 2613 de 2013 por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa, http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec_2613_2013.pdf.
143. <?> Lloreda Francisco, presidente ACP. Septiembre 2017. III Congreso de la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo ACP. Bogotá, Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
144. La fuente de todas las cifras de 2016 es: PEMEX, 2016: Anuario Estadístico 2016, México, pp. 5-6 y 15-16, <http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico-2016.pdf>. La fuente del valor de 2010 es: González, Ixel, 2015: Petróleo aporta menos al crecimiento del PIB en 2014, México, <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-aporta-menos-al-del-pib-en-2014.html>.
145. Los datos nacionales estadísticos no desglosan por industria de hidrocarburos.
146. Centro Mexicano para la Filantropía, 2017: Número de organizaciones en cada estado por figura legal, <http://200.57.117.52/Directorio2/Estadisticas/frmoOrganizacionesFiguraLegal.aspx>.
147. El amparo en un amplio sentido se revela como un conjunto de actos procesales o procesos que culminan en resolución judicial o sentencia, que constituye su causa final común, y en un sentido estricto, como un derecho, como una potestad que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales. La Constitución mexicana de 1917 establece como órgano de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, y dispone que a través del amparo pueden impugnarse actos o leyes de cualquiera de los tres Poderes, creando así el juicio de amparo en contra, también, de resoluciones judiciales. Consultado en: Ensayos Universitarios GMORR, 2009: Juicio de amparo en México, <https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/>
148. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
149. Enciso, Angélica, 2016: Hay en México 420 conflictos socioambientales: Investigador, <http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038nIsoc>.
150. David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética. Director General del proyecto Energía a Debate; y Jorge Arriaga, PhD en Desarrollo Regional por la Universidad de la Sorbona en París; fue Subgerente de Atención a Organizaciones Sociales en PEMEX y actualmente es consultor para la industria energética.

151. "En primer lugar, la ASF (Auditoría Superior de la Federación – SC) señala que existen vacíos normativos, toda vez que los Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos no establecen líneas claras sobre el seguimiento de la aplicación de los recursos y bienes. Lo anterior deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios", en: De la Fuente López, Aroa, 2017: Donativos y Donaciones de PEMEX: Deficiencias e Irregularidades, México, pp.2-3, <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ASF-Donativosydonaciones.pdf>.
152. Morris, Stephen, 1992: Corrupción y Política en el México Contemporáneo, México, pp. 76-79, https://books.google.com.mx/books?id=H1_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=_oDNsdtrNbJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTqMkt5_rYAhWQ7VMKHdw1CYyQ6AEIzDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false.
153. Diario Oficial de la Federación, 2014: Ley de Hidrocarburos, México, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014.
154. Entrevistas con académicos y académicas expertos en energía.
155. Entrevistas con actores sociales en el marco de este diagnóstico.
156. Secretaría de Energía, 2016: 4º Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2015-2016, México, pp. 69, http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf.
157. A noviembre del 2017, el gasoducto aún tenía parada la operación en el tramo Guaymas- El Oro. Consultado en: Zúñiga, Norma, 2017: Pide CFE liberar ducto Guaymas-El Oro, México, <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1262784&md5=0164b194d21007299490c50495577918&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>.
158. Resolutivo de la consulta previa, libre e informada del gasoducto Sonora. Consultado en: Gob.mx, 2015: Resolutivo de la CPLI a la Tribu Yaqui, México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf.
159. Comentarios al diagnóstico del Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
160. Tribunales federales ordenaron a los tres órganos de gobierno frenar el gasoducto. Consultado en: Escobar, Amalia, 2017: Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto, México, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/27/tribunal-ordena-secretarias-frenar-obras-de-gasoducto>.
161. Las entrevistas, con los diferentes actores en cada proyecto y con funcionarios de organizaciones de la sociedad civil permiten realizar esta aseveración, que de ninguna manera pretende ser generalizada.
162. Es decir, las formas históricas clientelares han tenido que cambiar por formas basadas en acuerdos internacionales para llevar a cabo la consulta indígena, por ejemplo, en donde la información previa y la consulta son un principio que se debe respetar.
163. Empresa filial de PEMEX que financia el proyecto.
164. El Plan de Gestión Social se incluye en los lineamientos que establece la Secretaría de Energía (SENER) para la evaluación de impacto social contemplada en la Ley de Hidrocarburos. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, www.cofemeresimr.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300.
165. En los lineamientos de la Evaluación de Impacto Social (Evis), uno de los requisitos es que la empresa debe presentar su Plan de Gestión Social dentro de la Evis.
166. Informe de labores de la Secretaría de Energía, Marco Legal y Participación en EITI y otros espacios regionales y bilaterales. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016, cit. arr., p. 5 y p. 160.
167. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.
- 168.
169. Se retoma esta ley en el reporte, ya que el gas natural es un insumo que va en crecimiento para la generación de energía eléctrica. Las atribuciones son claras para el momento de la extracción y transporte del gas y cada instancia reguladora.
170. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018, México, <https://www.gob.mx/sgm>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018: Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), México, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/>.
171. Estas cifras no incluyen información de las empresas prestadoras de servicios y tampoco incorpora información de la minería artesanal y de pequeña escala.
172. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2017: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, México, <https://www.gob.mx/sedatu>.
173. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
174. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018: Informe Anual 2018, México.
175. Saade Myriam, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los Casos de Colombia, México y el Perú. Santiago de Chile, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1.
176. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
177. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
178. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
179. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2017: Informe Anual 2017. México.
180. CCC forma parte de una red de organizaciones denominada Partners.
181. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
182. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.

183. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 1990: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, México, <http://www.contactopyme.gob.mx/mercados/info/secofi.html>.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
184. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
185. Los pasivos ambientales fueron el resultado de las operaciones de otras empresas entre las que se encuentran ASARCO, la cual posteriormente vendió sus concesiones a Grupo México. Durante la operación de estas empresas, México carecía de regulación ambiental, por lo que la remediación de los pasivos ambientales no era una exigencia para las empresas.
186. Un total de 490.000 m³ de suelo vegetal recuperado y almacenado para acciones de restauración.
187. Este proyecto tendrá un costo de más de 2 millones de dólares, ya que se requiere retirar y encapsular los contaminantes que fueron depositados por las otras empresas como parte del proceso de remediación. Es relevante destacar que New Gold, como estrategia para garantizar y cumplir con los compromisos definidos como parte de su plan participativo de cierre ambiental, cuenta con una fianza pagada ante la tesorería de la Federación por casi 30 millones de dólares que respalda el 100% del cierre biofísico y socioeconómico. De manera que el "Patio Paseo Victoria" es hoy en día una de las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras en este municipio.
188. Los "Pueblos Mágicos" es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en México desde el año 2001, para promover la oferta turística en el país, en sitios en donde sus habitantes y gobiernos locales han logrado proteger su riqueza cultural, por lo que son reconocidos como sitios que tienen grandes atributos históricos-culturales. En estos lugares se promocionan las artesanías, festividades, gastronomía del lugar, así como productos turísticos basados en la aventura, senderismo o ecoturismo.
189. New Gold Minería San Xavier S.A de C.V Cerro de San Pedro, 2015: Reporte de Sustentabilidad 2015, México, http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf.
190. Incluye Sonora (Nacozari, Esqueda, Guaymas y Cananea); Coahuila (Nueva Rosita); San Luis Potosí (Charcas y San Luis Potosí); Chihuahua (Santa Bárbara y Santa Eulalia); Michoacán (Angangueo); Zacatecas (Sombrerete); Guerrero (Taxco); Guanajuato (León); Oaxaca (Juchitán); Campeche (Ciudad del Carmen), y Baja California Sur (Guerrero Negro).
191. *Industria*: los representantes del sector industrial incluyen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Estas organizaciones agrupan a las principales empresas del sector de hidrocarburos en México y a las empresas mineras que generan aproximadamente 90% de la producción minera del país. Sociedad civil: los representantes de la sociedad civil fueron elegidas por un grupo de aproximadamente 40 OSC, que fueron invitadas e informadas en talleres nacionales y regionales sobre la intención del gobierno de adherirse a este estándar por un grupo impulsor conformado por Transparencia Mexicana, FUNDAR y PODER. Se eligió un grupo de representantes y suplentes que está conformado por: PODER, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSTA), Transparencia Mexicana (TM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En la actualidad, ALCOSTA no forma parte de este grupo de representantes y suplentes. El gobierno conformó un Grupo Intersecretarial (GI) integrado por medio de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) (por medio de la Subsecretaría de Minería) y la Subsecretaría de Hidrocarburos (SENER). Actualmente, la responsabilidad de presidir el GI está a cargo de la Subsecretaría de Minería.
192. USAID, Banco Mundial, Natural Resource Governance Institute, GIZ, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada Británica.
193. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2016: Informe Anual 2016, México.
Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
194. Secretaría de Economía (SE), 2016, cit. arr.
195. (1) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (Nuevo León), (2) Universidad Veracruzana (Veracruz), (3) Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila), (4) Universidad de Colima (Colima), (5) Universidad de Guanajuato (Guanajuato), (6) Universidad Autónoma del Estado de México (México), (7) Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), (8) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Chiapas), (9) Universidad de Sonora (Sonora), (10) Universidad Autónoma de Puebla (Puebla), (11) Universidad Estatal de Sonora (Sonora), (12) Universidad Politécnica Juvenino Rosas (Guanajuato), (13) Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Hidalgo), (14) Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Zacatecas), (15) Instituto Tecnológico de Chihuahua (Chihuahua), (16) Instituto Tecnológico de Morelia (Morelia), y (17) Instituto Tecnológico de Querétaro (Querétaro).
196. Unversia México, 2016: Licenciaturas en Ingeniería en Minas, <http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715>.
197. Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Transparencia Mexicana (TM), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSA), los Socios México/Centro de Colaboración Cívica (CCC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, CartoCritica, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Amigos del Río San Rodrigo, Oxfam, The Nature Conservancy, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Fundación Heinrich Böll, Fundación Desarrollo Sustentable A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES).
198. Saade Myriam, 2013, cit. arr.
Temper Leah, del Bene Daniela y Joan Martínez-Alier, 2015, cit. arr.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 2018, cit. arr.
Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014, cit. arr.
Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
199. Díaz, Luis y Morones Guadalupe, 2001: Inversión extranjera; derecho mexicano y derecho internacional, Edición 01, México: Themis.
200. Poder Judicial Federal, 2016, cit. arr.
201. Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017: Anuario Minero 2016, Lima, <https://es.scribd.com/document/351009672/ANUARIO-MINERO-2016-pdf>.

202. EY, 2018: Informe Final Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016. Consultoría para la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Lima, http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf.
203. Ministerio de Energía y Minas, 2017: Anuario Minero 2016, Lima, p. 118.
204. Lamentablemente no existen cifras accesibles para el sector hidrocarburos.
205. Defensoría del Pueblo, 2018: La Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos sociales a diciembre de 2017, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=19531>.
Defensoría del Pueblo, 2017: Reporte de Conflictos Sociales N.º 166, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-166---Diciembre-2017.pdf>.
206. Lanegra Iván, 2016: ¿Qué está en juego con la elección del Defensor del Pueblo?, Lima, <http://ojo-publico.com/294/que-esta-en-juego-con-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo>.
207. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
208. Glave Manuel y Kuramoto Juana, 2007: La minería peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber, Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Grade, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, pp. 135-181.
209. Baca Epifanio, 2015: Estudio sobre Marco Normativo Minero en Perú Lima, <http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Estudio%20EBaca.pdf>.
210. Participaron el Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Arequipa, diez municipalidades distritales, la asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores, el COFREN, el FREDICON, CONREDE, Comité de Gestión Ambiental de Uchumayo.
211. ONU Mujeres, La mujer y el medio ambiente, <http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment>.
212. Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental en el Perú Un acuerdo fruto del diálogo y las lecciones aprendidas, <http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/Visión-Minería-2021.pdf>.
213. Cooperación, 2017: Actualidad Minera del Perú, No. 222, <http://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/AMP-diciembre-2017.pdf>.
214. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de los Conflictos y la Gobernabilidad, 2017: Competencias en la atención de conflictos sociales, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=6>.
215. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2018: Poder Ejecutivo presenta Proyecto de Ley que pretende modificar Ley Orgánica de Hidrocarburos favoreciendo al sector privado y en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente, <http://www.dar.org.pe/noticias/poder-ejecutivo-presenta-proyecto-de-ley-que-pretende-modificar-ley-organica-de-hidrocarburos-favoreciendo-al-sector-privado-y-en-detrimento-de-los-pueblos-indigenas-y-el-medio-ambiente/>.
Scurrah Martin y Chaparro Anahí, 2014: La participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas: Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería y los hidrocarburos en el Perú, Lima, <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20y%20la%20consulta%20previa%20en%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20-%20M.%20Scurrah%20y%20A.%20Chaparro.pdf>.
216. CEPAL y OCDE 2016: Evaluaciones del desempeño ambiental Perú. Aspectos destacados y recomendaciones, Santiago, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40171-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru-2016-aspectos-destacados-recomendaciones>.
217. EY, 2018, cit. arr.
218. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018: La Participación Ciudadana en la Actividad de Hidrocarburos, http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=3556.
219. Milano Flavia y Sanhueza Andrea, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, Washington, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7499/Consultas-publicas-con-sociedad-civil-Guias-para-agencias-ejecutoras-publicas-y-privadas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
220. Ministerio de Cultura, 2015: Derecho a la Consulta Previa Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa, Lima, <http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Guia-Metodologica-para-la-Facilitacion-de-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf>.
221. Con respecto a los proveedores para la minería, el país no cuenta con datos registrados
222. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Real, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/.
223. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Externo, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/.
224. Datos levantados para este diagnóstico por la consultora apoyados en el Banco Central de la Republica Dominicana, encuestas directas a las empresas metálicas, y el Ministerio de Energía y Minas.
225. El dueño de Falcondo es American Nickel.
226. Ley 176-07
227. Ley 200-04
228. Thomen Ginebra, Cristina, 2012: Informe País - Trabajo Final Diplomatura Industria Extractiva, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, Julio 2012, Santo Domingo, República Dominicana.
229. Dirección General de Impuestos Internos, 2015: Ranking de Empresas 2015, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/Ranking%20de%20Empresas%202015.pdf>.
230. Dirección General de Impuestos Internos, 2016: Ranking de Empresas 2016, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/RankingEmpresas2016.pdf>.
231. Salvo los proyectos de la minera Falcondo, realizados a través de su rama de responsabilidad social Fundación Falcondo que iniciaron en 1989.
232. En 2007 PVDV empezó sus programas de responsabilidad social.
233. Barrick Pueblo Viejo: Estudio demuestra la sostenibilidad de los proyectos sociales implementados por Barrick Pueblo Viejo, Santo Domingo D.N, <http://barrickpuebloviejo.do/noticias/estudio-demuestra-la-sostenibilidad-de-los-proyectos-sociales/2016-10-13/144111.html>.
234. FOMISAR Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, <http://www.fomisar.com/>.

235. Oro Información, 2017: Las cinco mayores minas de oro del mundo. <https://www.oroinformacion.com/es/OroInformacion/metales/487/Las-cinco-mayores-minas-de-oro-del-mundo.htm>.
236. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
237. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
238. Los resultados a favor fueron con 86,22% en Maimón, 98,66% en Cotuí y 98,78% en Fantino (véase Planes de Desarrollo publicados por los ayuntamientos de Maimón, Cotuí y Fantino).
239. Son los órganos de participación ciudadana directamente relacionados con la planificación municipal, ver: Malagón, Angela, y Rosa Arlene María, 2012: Guía para la Creación del Consejo Económico y Social Municipal, Santiago de los Caballeros: Federación Dominicana de Municipios, <http://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2016/05/Guia-CES-FEDOMU-final.pdf>.
240. Bonilla, Teófilo, 2013: Diputados aprobaron renegociación de contrato con Barrick Gold, <http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>.
241. Barrick Pueblo Viejo, Responsabilidad Social Corporativa, <http://barrickpuebloviejo.do/responsabilidad-social/responsabilidad-social-corporativa/2016-10-13/122340.html>.
242. El Dinero, 2015: El lado amable de Barrick Pueblo Viejo - La minera dice que su accionar ha sido positivo en la provincia Sánchez Ramírez, <https://www.eldinero.com.do/10147/el-lado-amable-de-barrick-pueblo-viejo/>.
243. Al Momento, 2015: Barrick Pueblo Viejo inicia programa "una Computadora por Niño" en RD, Santo Domingo, <http://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-inicia-programa-una-computadora-por-nino-en-rd/>.
244. El Veedor Digital, 2015: ENDA y la Barrick extienden proyecto para reforestar Piedra Blanca-Los Haitises, Santo Domingo, <http://elveedordigital.com/provincias/item/6431-enda-y-la-barrick-extienden-proyecto-para-reforestar-piedra-blanca-los-haitises>.
245. Álvarez, Yulissa, 2017: La piscicultura, un atractivo ecoturístico de Cotuí La actividad, apoyada por la Barrick, impulsa el desarrollo de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí, <https://www.eldinero.com.do/40640/la-piscicultura-un-atractivo-ecoturistico-de-cotui/>.
246. Listín Diario, 2017: Inician trabajos de electrificación, Sánchez Ramírez, <https://www.listindiario.com/economia/2017/10/05/485133/inician-trabajos-de-electrificacion>.
247. Véase: Buena Práctica: 2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales
248. RD\$2'000.000,00, tasa de cambio del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) para diciembre 2017.
249. Basado en cálculos estimados de la incubadora por efectos del aumento de empleo producto de las mineras y del aumento estimado de población calculado por The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a un 1,7% anual de incremento de población. El link de acceso a The World Factbook es: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
250. Matos, Heidi, 2012: Más de 4 millones de pesos para microempresarios de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, Cotuí, <http://eljacaguero.com/mas-de-4-millones-de-pesos-para-microempresarios-de-sanchez-ramirez-y-monseñor-nouel/>.
251. Acento, 2016: INFOTEP y Fundación Rica entregan Premio Nacional a la Excelencia 2016, Santo Domingo, <https://acento.com.do/2016/sociales/8391590-infotep-fundacion-rica-entregan-premio-nacional-la-excelencia-2016/>.
252. Barrick Pueblo Viejo, Inician proyecto de emprendimiento para personas con capacidades motoras especiales, Sánchez Ramírez, <https://www.barrickpuebloviejo.do/inician-proyecto-de-emprendimiento-para-personas-con-capacidades-motoras/2017-10-20/184050.html>.
253. Severino, Jairon, 2016: Minería aporta RD\$226,023 millones a economía dominicana desde 2010 Su ponderación promedio en el PIB se mantiene en 1.73%, Santo Domingo, <https://www.eldinero.com.do/31719/la-mineria-ha-agregado-rd226023-millones-a-economia-dominicana-desde-2010/>. Conversión a dólares según la tasa de cambio del Banco Central de junio 2016
254. Según censo del 2010. Consultado en: Oficina Nacional de Estadística, 2008: Monseñor Nouel en Cifras Perfil Sociodemográfico Provincial, https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monseñor_nouel.pdf.
255. Equivalentes a RD\$335'475.957 a la tasa vigente del Banco Central de la República Dominicana al cierre de diciembre de 2017.
256. Oficina Nacional de Estadística, 2008, cit. arr.
257. Corresponde a RD\$ 54'024.173 según tasa Banco Central RD al 31 diciembre 2017.
258. Wikipedia, 2017: Proyecto Pueblo Viejo, https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Pueblo_Viejo.
259. Barrick Pueblo Viejo, Nuestra historia, <http://barrickpuebloviejo.do/informacion-general/nuestra-historia/2016-10-11/163729.html>.
260. La firma BGC Engineering Inc, de Canadá elaboró el Plan de Cierre para Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) 31 de Julio de 2013, Proyecto No: 0011-159 -. Consultado en: BGC Engineering Inc, 2013: Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo: Mejita, Cumba, Hondo, Pendiente Oeste y Desechos Peligrosos Final,, https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan_de_Administraci%C3%B3n_Medioambiental_del_Estado_1era_y_2da_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf.
261. Diario Libre, 2007: Contaminación afecta aún entorno de mina Pueblo Nuevo sufre las secuelas de la explotación, <https://www.diariolibre.com/noticias/contaminacin-afecta-entorno-de-mina-INDL148462>
262. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, <http://camiperd.org/category/documentos/guias-mineras/>.
263. El Día, 2013: Barrick Gold y la historia de un contrato muy complejo, Santo Domingo, <http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/>.
264. Diario Libre, 2014: Expertos se oponen a que el Senado declare Loma Miranda como Parque Nacional Afirman que la decisión sería inconstitucional, Santo Domingo, <https://www.diariolibre.com/noticias/expertos-se-oponen-a-que-el-senado-declare-loma-miranda-como-parque-nacional-ANDL636701>
265. Marcha Verde, <https://marchaverde.com/>.
266. Paula, Elexido, 2017: Marcha Verde: Patrimonio del Pueblo, <http://hoy.com.do/marcha-verde-patrimonio-del-pueblo/>.

267. Fundación Acción Verde, 2009: Declaración de La Comisión Ambiental de la UASD sobre la construcción de una Cementera, <http://www.accionverde.com/declaracion-de-la-comision-ambiental-de-la-uasd-sobre-la-construccion-de-una-cementera/>. Maimón Punto de Encuentro, Presidente de la Comisión Ambiental de la UASD habla sobre la minería en el país (Video), Maimón, <http://maimonpuntodeencuentro.blogspot.com/2015/09/presidente-de-la-comision-ambiental-de.html>
268. EFE, 2014: El padre Rogelio Cruz llama a la desobediencia civil por caso Loma Miranda, Santo Domingo, <https://www.listindiario.com/la-republica/2014/09/04/336184/el-padre-rogelio-cruz-llama-a-la-desobediencia-civil-por-caso-loma-miranda>.
269. Hoy, 2017: Marcha Verde reclama pago de RD\$3,000 millones a provincia Sánchez Ramírez, <http://hoy.com.do/marcha-verde-reclama-del-gobierno-pago-de-rd3000-millones-a-provincia-sanchez-ramirez/>.
270. Participación Ciudadana: ¿Qué es PC?, https://pciudadana.org/?page_id=4893.
271. Ver Grupo BID-sociedad civil Estrategia de Relacionamiento, 2018
272. Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
273. Publique lo que pagan, 2018: Objetivos, encontrado en: <http://www.publishwhatyoupay.org/es/quienes-somos/objetivos/>.
274. En la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales (2.7.3.1., p. 137), Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile (2.1.3.3., p.29), Mesa de Diálogo de Huari, Perú (2.6.3.3., p. 120).
275. Devonshire Initiative, 2017: About us, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/about-us/>.
276. Devonshire Initiative, s/a: Partnering and Partnerships: lessons learned in the DI, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/wp-content/uploads/DI-Partnership-Lessons-Learned-FINAL-.pdf>.
277. Es una plataforma de intercambio y comunidades de aprendizajes sobre el tema de conservación de la biodiversidad, apoyada por GEF, Convención sobre Diversidad Biológica, UN Environment y PNUD, ver: NBSAP Forum, 2018: Welcome to the NBSAP Forum, encontrado en: <http://nbsapforum.net/>.
278. Goxi es una comunidad virtual sobre gobernanza en industrias extractivas, apoyada por el Banco Mundial y PNUD, ver: GOXI, 2018: Guidelines for how to use GOXI, encontrado en: www.goxi.org.
279. GOXI, 2018: GOXI learning series, encontrado en: <http://goxi.org/page/goxi-learning-series>.
280. Entrevista Ricardo Morel Ex Vicepresidente de Antamina y ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha y Angloamerican.
281. Intervención de Raúl Benavides Vicepresidente de Negocios de Buenaventura en reunión del Grupo de Diálogo Directo Noviembre del 2016

